

Proyecto de ley Migración y Extranjería

Boletín 8970-06

| | |
|--------------------------------|---|
| Tramitación | Segundo trámite constitucional. |
| Urgencia | Discusión Inmediata |
| Discusión | En particular |
| Sugerencia votación | Aprobar (rechazando indicaciones peligrosas de la oposición). |
| Origen de la Iniciativa | Mensaje |
| Autores | Ejecutivo |

Sugerencia de votación: Votar a favor (rechazando indicaciones peligrosas de la oposición).

Objetivo del Proyecto

El objetivo original del proyecto es equilibrar el legítimo derecho del Estado y sus ciudadanos de normar la forma en que los extranjeros ingresan y permanecen en el país, con el respeto y garantía de los derechos fundamentales de los migrantes y la mitigación de los riesgos asociados con el movimiento de personas, para así reducir la migración irregular y reprimir las actividades transfronterizas ilícitas y fortalecer el vínculo con los chilenos en el exterior.

Antecedentes

El proyecto tiene más de 7 años de tramitación, y fue ingresado por el Presidente Sebastián Piñera durante su primer Gobierno, el 4 de junio del año 2013. Durante la segunda administración de Michelle Bachelet, el proyecto no tuvo mayor avance en su tramitación. Debido a la gran ola de migración que experimentó nuestro país desde el año 2017. El presidente Piñera, decidió impulsar nuevamente la tramitación del proyecto de ley.

En la Cámara de Diputados, el proyecto fue analizado por las comisiones de Gobierno, Hacienda, Derechos Humanos y Zonas Extremas, siendo finalmente aprobado por la Sala de la Cámara el 16 de enero de 2019. En el Senado fue discutido en las comisiones de Gobierno, Derechos Humanos y Hacienda, siendo aprobado en general, de forma unánime por la Sala del Senado el 13 de agosto de 2019, con 41 votos a favor¹.

¹ Usted votó a favor.

Contenido

El proyecto consta de 179 artículos permanentes y 10 artículos transitorios. Además, tiene por finalidad lograr tres grandes objetivos:

1. Tener una regulación migratoria moderna que se haga cargo del fenómeno migratorio que ha vivido Chile desde 2015 y el que se prevé vivirá en el futuro.
2. Una política migratoria que apunte a una migración ordenada, segura y regular.
3. Crear una institucionalidad migratoria que pueda no solo tramitar documentos, sino también avanzar hacia una política integradora e inclusiva.

Tener una regulación migratoria moderna

El Decreto Ley Nº 1.094 que nos regula en materia de migraciones, data del año 1975 y tiene claras deficiencias:

- Tiene 45 años, siendo lejos la regulación más antigua de Sudamérica.
- El decreto fue creado en un momento político muy distinto al actual, donde el principal énfasis era la seguridad nacional.
- Al migrante se lo veía primero como una amenaza.
- Contempla una institucionalidad que hoy es deficiente para la generación de una política migratoria. Hoy existe una dispersión de atribuciones entre el Departamento de Extranjería y Migración de la Subsecretaría del Interior y el Ministerio de Relaciones Exteriores.
- No contempla derechos y deberes de los migrantes y a los chilenos en el extranjero.
- Sólo consagra tres categorías migratorias, las que claramente son insuficientes: residencia temporaria, estudiantes y sujeta a contrato.
- Hace muy difícil la expulsión de migrantes.
- Sólo la Universidad de Chile tiene la facultad de revalidar títulos universitarios extranjeros.

Migración ordenada, segura y regular

Una legislación moderna permite equilibrar el derecho del Estado y sus ciudadanos de normar la forma en que los extranjeros ingresan al país, con el respeto y garantía de los derechos fundamentales de los migrantes. Esta legislación moderna debe tomar en consideración los riesgos asociados con el movimiento de personas, para reducir la migración irregular y reprimir las actividades ilícitas transfronterizas.

Crear una institucionalidad migratoria

Se establece las facultades que tendrá el Presidente, el Consejo de Política Migratoria, las responsabilidades del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Servicio de Migraciones:

| Presidente de la República | Consejo de Política Migratoria | Responsabilidades Ministerio | Responsabilidades del Servicio |
|---|---|---|---|
| DEFINE la política migratoria, siguiendo siete criterios: 1. La realidad social, cultural, económica, local, demográfica y laboral del país; 2. La política de seguridad interior y exterior del Estado, y el resguardo del orden público. 3. El respeto y promoción de los derechos humanos del migrante. 4. Las relaciones internacionales y la política exterior del país. 5. Los intereses de los chilenos en el exterior. 6. La integración e inclusión de los migrantes. 7. La contribución de la migración al desarrollo social, económico y cultural del país. | ASESORA al Presidente, a través del Ministerio, en la formulación de la Política Nacional de Migración Efectúa recomendaciones respecto a materias migratorias a los organismos públicos con competencia en la materia Concurre a la definición de subcategorías migratorias de residencia temporal | ELABORA y PROPONE Política Nacional Migratoria SUPERVISA y EVALÚA cumplimiento de objetivos de la Política POTESTAD reglamentaria EXPULSIÓN calificada Conserva las facultades en materia de REFUGIO NACIONALIZACIÓN | EJECUTOR de la Política Nacional Migratoria Tramitación de visados y todo tipo de procedimiento administrativo migratorio y sanciones Recopilación y sistematización de información relevante en materia migratoria Llevar el Registro Nacional de Extranjeros |

Nudos críticos del proyecto de ley de Migraciones

Durante la discusión del proyecto de ley, se aprobaron indicaciones de senadores de oposición, que van directamente en contra de los objetivos esenciales del proyecto:

Artículo 17: Beneficios sociales.

No se exige la residencia para acceder a beneficios de seguridad social financiados por recursos de todos los chilenos mediante el cobro de impuestos. Es importante que primero el Estado chileno sea capaz de brindar servicios sociales de calidad a todos los chilenos, antes de garantizarlo para todos quienes hacen ingreso al país.

Artículo 56 bis: Turismo laboral.

Otorga la permanencia transitoria para la búsqueda de oportunidades laborales o “turismo laboral”. Según un estudio elaborado por Extranjería, entre los años 2016 y 2020 los chilenos con 12 años de escolaridad o menos han perdido 250 mil empleos. En cambio, se ha generado 280 mil empleos para extranjeros con el mismo nivel académico. Hay que dejar en claro que la migración puede generar

varios beneficios para un país, pero es necesario equilibrar el ingreso de extranjeros, con las necesidades de los chilenos.

Además, si miramos la experiencia del pasado, podemos ver como muchos extranjeros sin documentación han sido vulnerados en sus derechos fundamentales, al ser sobreexplotados laboralmente sin recibir una remuneración digna.

Artículo 70 numeral 13: Migración de mujeres víctimas de trata y tráfico de migrantes.

El artículo 70 establece nuevas subcategorías y exige que se consideren una serie de situaciones, incluyendo, mujeres víctimas de trata y tráfico de migrantes, o de violencia de género o intrafamiliar, en conformidad a la legislación nacional.

Esto abre la puerta para que se haga uso de esta causal muy sensible, para ingresar a inmigrantes a nuestro país. No se exige denuncia, sentencia o prueba alguna de la situación de vulnerabilidad para hacer ingreso al país. Estas mujeres tendrán un trato especial por el Estado, garantizando una visa que regule su permanencia.

Sin duda que, no se trata de estar en contra del ingreso de refugiados o víctimas, cuyos derechos fundamentales han sido vulnerados, pero es menester un sistema que de cuenta de la realidad fehacientemente, sin abrir la puerta a que sea utilizada para otros fines.

Esta indicación aprobada es inadmisibile por irrogar gasto fiscal.

Artículo 132: Procedimiento de niños, niñas y adolescentes que no estén acompañados de sus padres.

En este caso, los niños quedarán bajo el cuidado de la autoridad encargada de la protección de niños, niñas y adolescentes, mientras se adopten las medidas de protección que ordene el tribunal competente. Si bien, nadie puede estar en contra de la protección de los derechos de los niños, es muy posible que se ocupe esta posibilidad por parte de padres irresponsables para hacer ingreso de sus niños al país, dejándolos abandonados y bajo el cargo del Sename. No son los menores de edad quienes toman la decisión de ingresar al país. Primero debemos solucionar la grave situación que viven miles de niños vulnerables nuestro país, acoger un sin numero de niños extranjeros no va a permitir otorgarle a todos el resguardo efectivo de sus derechos.

Artículo 142: Recurso judicial donde el afectado podrá reclamar por sí o por cualquier persona en su nombre, ante la Corte de Apelaciones.

Sin duda que se va a ocupar este recurso para poner freno a todas las expulsiones, generando una carga excesiva para las cortes de apleacoines en nuestro país, que ya se encuentran sobrecargadas.

Artículo 8º Transitorio.

Extranjeros que se encuentren en situación migratoria irregular o con tramitación de residencia pendiente podrán, dentro del plazo de 90 días, solicitar un visado de residencia temporaria sin ser sancionados administrativamente. Esto podrá ser utilizado de forma fraudulenta, generando una migración irregular, conrario al objetivo original del proyecto.

Comentario

Como se puede evidenciar, el proyecto de ley ha pasado por varias etapas, perdiendo su objetivo principal de establecer una regulación moderna que garantice una migración ordenada, segura y regular.

Las indicaciones presentadas por los senadores de oposición hacen que nuevamente el proyecto de ley no tenga el respaldo en una materia que debiera ser consensuada, en búsqueda de establecer una política de migración a largo plazo sin ideologías.

Las indicaciones tienen un claro tinte ideológico de izquierda, quienes, sin lugar a dudas, intentarán catalogar a todos los que voten en contra, de insensibles y poco empáticos con la situación de los migrantes. Sin embargo, es importante destacar que estas ideas no cuentan con el apoyo popular de la población, que en estos momentos mas que nunca, esta preocupado de sobrevivir el día a día en una crisis sanitaria y económica grave que afecta al país. Primero esta Chile y los chilenos, hay que ordenar la casa antes de pensar en poder ayudar adecuadamente a los demás.

Finalmente, hay que dejar en claro que no se esta en contra de la migración, con tal que esta sea ordenada, cumpla con las reglas y se realice respetando los derechos de todos.

Por lo anterior, se sugiere votar a favor del proyecto de ley, pero en contra de las indicaciones ideológicas mencionadas anteriormente.

Modifica el Código Sanitario en materia de disposición de alimentos para evitar su desperdicio.

Boletines 10.198-11, 10.337-11, 10.513-11, 10.556-11 y 10.835-11, refundidos.

| | |
|--------------------------------|--|
| Proyecto | Modifica el Código Sanitario en materia de disposición de alimentos para evitar su desperdicio. |
| Tramitación | Primer trámite constitucional, primer informe. |
| Urgencia | Sin urgencia. |
| Discusión | En general |
| Sugerencia votación | A favor en general, solicitando un plazo de indicaciones para resolver las dudas que genera la iniciativa legal. |
| Origen de la Iniciativa | Múltiples mociones refundidas. |
| Autores | Ossandón, Girardi, Goic, Montes, Chahuan, y Navarro (boletines refundidos) |

Sugerencia de votación: A favor en general, pidiendo plazo de indicaciones para una mayor discusión en particular.

Objetivo del Proyecto

La iniciativa legal tiene por objeto *“evitar que se desperdicien alimentos que no se consuman y estén próximos a perder su calidad de aptos para el consumo humano”*.

Antecedentes

El proyecto fue aprobado en general (4x0) y en particular por la comisión de salud el. La iniciativa fue aprobada por la Senadora Jacqueline van Rysselberghe.

Los mocionantes de los proyectos de ley destacan los siguientes puntos:

1. El tremendo desperdicio de alimentos aptos para el consumo humano a lo largo del país.
2. El cuestionamiento ético al botar alimentos aptos para el consumo humano, tomando en cuenta las necesidades alimenticias que existen en el mundo.
3. El desperdicio afecta negativamente los recursos utilizados para su producción, es decir, tierra, agua, energía e insumos.
4. El no consumo de estos alimentos supone una emisión innecesaria de CO2.

Contenido

El proyecto de ley tiene consta de dos artículos.

1. Artículo 1º

Prohíbe destruir o desechar alimentos aptos para el consumo humano, ya sean estos perecibles o no, que hayan perdido su valor comercial por alguna de las siguientes causas:

- a. Embalaje fallado, dañado o defectuoso.
- b. Cambio de marca o de su etiqueta.
- c. Razones estéticas.
- d. Mala rotulación.
- e. Proximidad de su fecha de vencimiento.

Es decir, se prohíbe desechar producto que siguen siendo aptos para el consumo humano.

Establece una obligación para los fabricantes, productores, importadores, distribuidores y comercializadores de productos alimenticios y de alimentos preparados, de **entregar de forma gratuita** los alimentos que se encuentren en alguna de las categorías mencionadas, a entidades receptoras certificadas, estableciendo un convenio con ellas.

Se establecerá un reglamento que dispondrá de las entidades receptoras certificadas y también fijará los requisitos mínimos que ellas deberán cumplir, tales como medios y capacidad de almacenamiento, transporte y distribución y definición del área geográfica en que operarán.

Las entidades receptoras, a su vez, deberán hacer entrega de estos alimentos a instituciones públicas o privadas sin fines de lucro, dedicadas a la atención de personas en situación de vulnerabilidad.

Además, el proyecto establece la obligación de los establecimientos comerciales tales como restaurantes, supermercados, hoteles y servicios de preparación de alimentos, de ofrecer a sus clientes la posibilidad de llevar los alimentos no consumidos.

2. Artículo 2º

El artículo 2º dispone que esta ley entrará en vigor seis meses después de su publicación en el Diario oficial y durante ese lapso el Reglamento Sanitario de los Alimentos deberá adecuarse a las disposiciones del artículo anterior.

Consideraciones Técnicas

Si bien la iniciativa a primera vista parece positivo, genera ciertas dudas que no son resueltas:

1. No asegura que el alimento donado siga siendo apto para el consumo humano, en especial, en aquellos alimentos que son donados cerca de su fecha de vencimiento.
2. Las entidades receptoras no se ven obligadas a las mismas exigencias sanitarias que los productores o comercios destinados a la venta de alimentos, lo que genera una relajación a la normativa vigente sobre higiene de manipuladores, exigencias del expendio de alimentos, generando un riesgo a la salud de las personas.
3. En Chile no tenemos un déficit alimentario, y ya existen programas de alimentación complementaria, como la que realiza JUNAEB en la materia.
4. El proyecto de ley podría considerarse expropiatorio, generando responsabilidad contra el Estado de indemnización.

Consideraciones Políticas

1. Durante la crisis del Covid-19, se hace extremadamente dificultoso votar en contra de este proyecto de ley. En época en que las comunidades mas vulnerables hacen ollas comunes para alimentarse, pareciera ser alejado de la realidad votar en contra.
2. Se sugiere crear incentivos para que las empresas donen sus alimentos, cumpliendo con las exigencias sanitarias y de higiene, fomentando la responsabilidad social de las empresas.
3. La norma no deja en claro quien fiscalizará y sancionará el incumplimiento de las exigencias establecidas.

Por lo anterior se sugiere votar a favor de la idea de legislar, pero solicitando un plazo de indicaciones que permita realizar un nuevo estudio en particular de la iniciativa.

El proyecto fue aprobado en general y en particular a la vez en la comisión, por lo que es totalmente posible solicitar un plazo de indicaciones.

Proyecto de ley que modifica el Código Civil en el sentido de suprimir el impedimento de las segundas nupcias.

Boletín 11126-07

| | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Tramitación | Segundo trámite constitucional |
| Urgencia | Suma |
| Discusión | En particular |
| Sugerencia votación | A favor |
| Origen de la Iniciativa | Moción |
| Autores | Nicolás Monckeberg y Matías Walker |

Sugerencia de votación: Votar a favor

Objetivo del Proyecto

El proyecto de ley tiene por objetivo eliminar los impedimentos que afectan a la mujer cuyo matrimonio ha sido disuelto o declarado nulo y que pretende contraer nuevas nupcias. Asimismo, establecer una regla para dilucidar la filiación en caso de duda.

Antecedentes

El proyecto ingresó a la Cámara de Diputados el 2 de marzo de 2017. Fue aprobado en general de forma unánime por la Sala de la Cámara de Diputados el 21 de junio de 2017, con 144 votos a favor. Luego el 21 junio de 2018 fue aprobado en particular con 121 votos a favor y 1ª abstención (Diputado Matta).

En el Senado, el proyecto de ley fue aprobado por la Sala el 18 de octubre del 2018 con 28 votos a favor y ningún voto en contra¹. El proyecto fue discutido en particular por la Comisión de Constitución, donde nuevamente hubo unanimidad al respecto, siendo aprobado el 28 de julio.

¹ Usted no votó en general.

Contenido

El proyecto de ley modifica disposiciones del Código Civil, con la finalidad de eliminar la discriminación que tienen las mujeres al prohibírseles contraer matrimonio dentro del plazo de 270 días luego de puesto fin a su primer matrimonio.

Indicación 1

Se derogan los artículos 128, 129 y 130 del Código Civil.

Artículo 128

- Cuando se pone fin a un matrimonio, la mujer queda prohibida de contraer uno nuevo, en un plazo de 270 días subsiguientes al fin del matrimonio anterior.
- En el caso de estar embarazada, no podrá contraer matrimonio hasta dar a luz a su hijo.
- Se permite a la mujer disminuir el plazo dando cuenta que haya sido absolutamente imposible el “acceso del marido a la mujer”.

Este artículo prohíbe la celebración de un nuevo matrimonio durante el plazo de 270 días, ya que se busca evitar confusión respecto de la paternidad el niño o niña. Este artículo hoy se hace bastante inútil con el avance en la medicina, y la facilidad que hoy existe para determinar biológicamente la paternidad del hijo.

Artículo 129

- Dispone que el registro civil no podrá permitir el matrimonio si la mujer esta comprendida en el caso del artículo 128.

Artículo 130

- Consagra una sanción para quienes infrinjan el artículo 128: indemnización por perjuicios ocasionados a terceros a causa de la incertidumbre de la paternidad.

Indicación 2

- Se elimina la disposición aprobada por la Cámara de Diputados que modificaba la presunción paternidad del artículo 184. El artículo 184 establece la presunción de paternidad, pero explica en su inciso segundo que no existirá esta presunción cuando el menor nace antes de los 180 días y el marido (del nuevo matrimonio) no tuvo conocimiento de que estaba embarazada y desconoce la paternidad. Lo aprobado por la Cámara modificaba el plazo de 180 días reduciéndolo a 168 días. Casi todas las legislaciones comparadas tienen el plazo de 180 días y no hace sentido su reducción.

Indicación 3

- Agrega un nuevo 4º inciso al artículo 184, pasando el actual inciso 4º a ser inciso 5º. Esta modificación busca establecer que cuando una mujer contrae nuevas nupcias, y da a luz a un

niño dentro del segundo matrimonio, se va a presumir que el hijo del actual marido es el padre, independiente del plazo que haya transcurrido desde la disolución del primer matrimonio.

- Lo anterior es sin perjuicio del derecho del actual marido para, en el caso de que el menor nazca dentro de los 180 días desde celebrado el matrimonio, desconocer judicialmente la paternidad. En caso de proceder el desconocimiento judicial, se presume que el exmarido es el padre del menor, siempre y cuando haya nacido dentro de los 300 días desde el término del matrimonio anterior.

Indicación 4

- Se suprime lo acordado por la Cámara de Diputados en orden que hacía efectivo la presunción de paternidad si el menor nace 300 días después de puesto término al AUC.

Modificaciones a la ley que crea el Acuerdo de Unión Civil

- Se deroga el impedimento de contraer nuevas nupcias u otro AUC durante el plazo de 270 días desde la expiración del acuerdo de unión civil.
- Se hace aplicable la modificación realizada al artículo 184 mencionado anteriormente, a los que pongan término al acuerdo de unión civil.

Comentarios

Presunciones en nuestra legislación en torno a esta materia:

1. Presunción de concepción:

De la época de nacimiento se puede presumir el momento de la concepción: se presume que la concepción ha precedido al nacimiento no menos que 180 días cabales y no más de 300 contados hacia atrás, desde la medianoche en que principie el día del nacimiento.

2. Presunción de paternidad:

Se presumen hijos del marido los nacidos después de la celebración del matrimonio y dentro de los 300 días siguientes a su disolución o la separación judicial de los cónyuges.

Tomando en consideración estas presunciones, se tomó la decisión por parte de Andrés Bello al momento de crear nuestro Código Civil, de establecer el impedimento que hoy es totalmente discriminatorio en contra de las mujeres. Como se dijo anteriormente, este impedimento ya no tiene justificación alguna ya que, con la tecnología existente, se hace bastante fácil determinar la paternidad biológica del menor.

Es importante señalar que el padre siempre tendrá el derecho de exigir la paternidad, y que el nuevo marido podrá desconocer judicialmente la presunción que existe cuando un menor nace dentro de los 180 días siguientes a la celebración del matrimonio. De esta forma, el derecho del niño a conocer sus orígenes y al tener un padre y una madre es resguardada.

Por lo anterior se sugiere aprobar el proyecto de ley.

Proyecto de ley que perfecciona los textos legales que indica, para promover la inversión.

Boletín 11747-03

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| Tramitación | Informe Comisión Mixta |
| Urgencia | Simple |
| Discusión | Mixta |
| Sugerencia votación | A favor |
| Origen de la Iniciativa | Mensaje |
| Autores | Ejecutivo |

Sugerencia de votación: Votar a favor

Objetivo del Proyecto

El proyecto de ley tiene por finalidad perfeccionar nuestro ordenamiento jurídico en diversas materias, para lograr equilibrar la certeza jurídica que éste provee, además de la agilidad y rapidez que demanda la ejecución de proyectos productivos de gran importancia para Chile. Para ello, el proyecto busca los siguientes objetivos específicos:

1. Disminuir plazos de tramitación y reduciendo el costo asociado.
2. Eliminar incertezas jurídicas.
3. Mejorar la información disponible para inversionistas mineros.

Antecedentes

El proyecto ingresó a la Cámara de Diputados el 16 de mayo del 2018, siendo aprobado en general y en particular el 29 de noviembre de 2018.

En el Senado, el proyecto fue aprobado en general el 12 de marzo de 2019 con 29 votos a favor, 2 votos en contra y 3 abstenciones. Votaron en contra los senadores Navarro y Soria y se abstuvieron los senadores Latorre, Órdenes y Quintana. Después de casi un año, el proyecto fue aprobado en particular en la Sala del Senado, con modificaciones, el 22 de enero del 2020.

En su tercer trámite, la Cámara de Diputado rechazó las modificaciones propuestas por el Senado al proyecto de ley, el 9 de junio del 2020. Por ende, se formó una comisión mixta con la finalidad de

lograr un acuerdo entre ambas Cámaras. El informe de la mixta fue aprobado por la Cámara de Diputados e 23 de julio con 148 votos a favor, ningún voto en contra y 3 abstenciones. Se abstuvieron los Diputados Alarcón, Sabat e Ignacio Urrutia.

Contenido

El proyecto establece medidas en los siguientes ámbitos:

1. Materia ambiental.
2. Minería.
3. Urbanismo.
4. Coordinación entre los órganos de la administración del estado.
5. Aguas.
6. Inversión microeconómica.
7. Actualización al procedimiento de denuncia de obra nueva.

A continuación, se detallan los puntos más importantes discutidos en la comisión mixta:

Materia ambiental

1. Centrales y plantas de energía eléctrica

Todas las centrales eléctricas que generan energía mayor a 3 MW deben ingresar o someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). El problema con este criterio es que no toma en consideración los reales efectos que se pueden generar en nuestro medio ambiente, solo la energía que es producida. Por ende, se están obligando a pasar por SEIA incluso a generadores de energía limpia y renovable, lo que demuestra que el criterio debe ser actualizado.

La propuesta era reemplazar el criterio de capacidad de generación por la del impacto ambiental del proyecto. Sin embargo, la comisión mixta decidió no innovar en la materia, dejando la actual legislación en vez de la propuesta del Senado, que ampliaba aún más aquellos que debían someterse al SEIA.

2. Residuos vegetales

Los proyectos de saneamiento vegetales deben ingresar al SEIA. Durante la discusión del proyecto en el Senado, el Senador Letelier propuso que se estableciera un umbral para su no ingreso al SEIA en el caso de residuos vegetales. Sin embargo, la comisión mixta tomó la decisión de mantener la redacción actual, sin establecer el umbral.

3. Regulación de pertinencias a nivel legal

Hoy la pertinencia sólo se regula a nivel reglamentario y no a nivel legal. Actualmente cada año ingresan más de 2000 pertinencias a la autoridad ambiental por parte de interesados en consultar si deben o no presentar un proyecto de evaluación ambiental.

El proyecto consagra a nivel legal que el pronunciamiento por parte de la autoridad competente es vinculante ante las consultas que se le realizan (pertinencias). De esta forma, se otorga mayor certeza jurídica para quienes estén interesados en invertir en nuestro país, ya que podrán consultar previamente si es o no necesario realizar un proyecto de evaluación ambiental o no.

Lamentablemente se rechazó esta posibilidad en la comisión mixta, dejando en claro que no será vinculante el informe emitido por la autoridad ambiental de las pertinencias. Con esto se genera una mayor incertidumbre, la que va en contra del propósito del proyecto. Se le resta importancia al SEA ya que no podrá determinar (de forma vinculante) si un proyecto debe ser ingresado o no al SEIA, y, además, el procedimiento de responder las pertinencias no tendrá utilidad alguna siendo un desperdicio de tiempo y recursos fiscales.

4. Caducidad de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) frente a procesos administrativos o judiciales.

La RCA caduca luego de 5 años sin que se haya iniciado la ejecución del proyecto o actividad autorizada, desde que se notifica la RCA. En la práctica, debido a acciones o recursos judiciales que se interponen en contra de la RCA, van caducando los RCA, imposibilitando dar inicio posterior a las obras autorizadas. Se genera entonces un círculo vicioso, donde a pesar de existir resolución favorable, estas caducan por el plazo del tiempo y las acciones judiciales interpuestas en contra de la resolución.

El proyecto consagra que se suspenderá el RCA por un plazo máximo de 3 años, cuando se interponen acciones o recursos en contra de la RCA, mientras dure la suspensión decretada.

5. Planes de prevención y descontaminación ambiental

Hoy los planes ambientales exigen la reducción de emisiones para todas las actividades responsables por igual, sin distinguir entre el tamaño de la empresa y el nivel de contaminación que generan. De esa forma, una actividad pequeña en emisiones deberá reducir su carga en la misma proporción que otras de mayor envergadura y contaminación.

El proyecto establece la posibilidad que los planes de prevención y descontaminación puedan distinguir tipos de fuentes en directa relación a su aporte contaminante.

Materia de Minería

Se permite que el Servicio Nacional de Geología y Minería pueda ocupar como fuente de su catastro y para su actualización los Boletines Oficiales de Minería. Además, se obliga a que se le informen ciertos contratos de CORFO relativos a la explotación del litio.

Materia de Urbanismo

Se establece la obligación de la Dirección de Obras Municipales de recibir e ingresar en la correspondiente plataforma, los reclamos que se presenten en sus oficinas dentro del plazo. En definitiva, se promueve la digitalización y el trámite en línea como medida de modernización.

Materia de coordinación entre órganos de la administración del Estado

El proyecto permite que dos o más servicios públicos puedan celebrar convenios que estimen necesarios para dar cumplimiento a sus fines respectivos, previa aprobación por decreto suscrito por los ministros correspondientes.

Comentarios

En general la propuesta de la comisión mixta es positiva, ya que viene a solucionar las divergencias suscitadas entre ambas cámaras. Sin embargo, es importante destacar que, en materia de pertinencias, la comisión mixta no acogió la propuesta de hacer vinculante la respuesta entregada por la autoridad ambiental. Esto implica que el SEA seguirá con la obligación de responder las pertinencias, gastando tiempo y recursos para ello, pero sin que sea vinculante. Es decir, habrá un desperdicio de tiempo y recursos fiscales para la elaboración de un informe que será inútil por no ser vinculante. Esta norma es importante rechazar, ya que va en contra del sentido y espíritu del proyecto, que es otorgar mayor certeza jurídica para aumentar la inversión en nuestro país.

Además, sugiero hacer el punto de que hay que cambiar el criterio con la que se determina si un central de energía eléctrica debe ser sometido al SEIA. No resulta lógico el criterio que hoy existe de 3 MW, ya que pueden existir centrales y plantas de energía eléctrica que no produzcan mucha contaminación, como el caso de aquellos que utilizan energías renovables. Debemos aumentar e incentivar la energía limpia y renovable en nuestro país, no limitarla y frenarla obligándoles a ser sometidos a SEIA cuando no producen grandes niveles de contaminación.

Proyecto de ley relativo al ámbito de aplicación del procedimiento de tutela laboral.

Boletines 12322-13, 12327-13 y 9476-13 refundidos.

| | |
|-------------------------|---|
| Tramitación | Tercer trámite constitucional |
| Urgencia | Sin urgencia |
| Discusión | Única |
| Sugerencia votación | Votar en contra |
| Origen de la Iniciativa | Moción |
| Autores | Senadores Goic, Latorre, Letelier, Muñoz y Rincón |

Sugerencia de votación: En contra

Objetivo

Este proyecto de ley tiene por finalidad establecer el ámbito de aplicación del procedimiento de tutela laboral que contempla el Código del Trabajo, respecto de los funcionarios públicos.

Antecedentes

- El proyecto ingresó al Senado el 18 de diciembre de 2018.
- Fue aprobado en **general** en la Sala del Senado el 5 de marzo de 2019, con 31 votos a favor, ningún voto en contra y 8 abstenciones. Las abstenciones fueron de los siguientes senadores:
 - o Coloma
 - o Durana
 - o Ebensperger
 - o Galilea
 - o García Huidobro
 - o Prohens
 - o Sandoval
 - o Von Baer
- La Sala del Senado aprobó en¹ **particular** el proyecto el 12 de marzo de 2019, con 27 votos a favor y 4 abstenciones. Se abstuvieron los siguientes senadores:
 - o Coloma
 - o Ebensperger
 - o García Huidobro
 - o García Ruminot

¹ Usted no votó en particular el proyecto.

- El proyecto en segundo trámite fue aprobado por la Sala de la Cámara en particular el 3 de marzo del presente año.

Contenido

El proyecto de ley consta de dos artículos:

Artículo 1º Interpretación del artículo 485 del Código del Trabajo

Este artículo realiza una interpretación al artículo 485 del Código del trabajo, a fin de contemplar la tutela laboral para los funcionarios públicos. Se incluye a aquellos funcionarios de la administración del Estado, del Congreso Nacional, del Poder Judicial, trabajadores de empresas o instituciones del Estado o aquellas en que tengan aportes, participación o representación. Además, se hace extensivo a funcionarios que se desempeñen en el Ministerio Público, Tribunal Constitucional, Justicia Electoral, Contraloría General de la República, Banco Central y a todos los trabajadores de entidades que la leyes declaran como autónomas.

Artículo 2º Se modifica los artículo 486 y 487 del Código del Trabajo

Artículo 486: tiene por objeto precisar el ámbito de atribuciones que dispondrá la dirección del trabajo para evaluar y denunciar los hechos que considere una vulneración de derechos fundamentales.

Artículo 487: tratándose de funcionarios o trabajadores del sector público, no proceda el sistema indemnizatorio del sector privado y la posibilidad de que el trabajador opte por la reincorporación al servicio solamente cuando la discriminación que fue objeto sea calificada en la sentencia como grave.

Contenido

El procedimiento de tutela laboral se lleva ante los tribunales del trabajo y se aplica principalmente a trabajadores del sector privado. Este procedimiento tiene por objetivo resguardar y proteger los derechos fundamentales de los trabajadores dentro del ámbito de la empresa, protegiendo al trabajador frente a vulneraciones de derechos ocasionados por el empleador, por ejemplo: discriminación, acoso laboral, salud física y psíquica etc.

Hoy este procedimiento está destinado a trabajadores regidos por el Código del Trabajo, excluyendo a los trabajadores del sector público, cuyos derechos se encuentran resguardados por otros instrumentos o mecanismos y por el accionar de la Contraloría General de la República. Es este organismo, y no la dirección del trabajo, quien hoy vela por la protección de los derechos de los funcionarios públicos.

Varias interpretaciones de la Corte Suprema ha hecho aplicable la tutela laboral al sector privado, si embargo, el Tribunal Constitucional el 6 de diciembre de 2018, estimó que comprender a los funcionarios públicos en el ámbito de aplicación de la tutela laboral *“desvirtúa el régimen constituiconal y legal que le es propio, amen de abrir la intervención de los juzgados de letras del trabajo respectos de una materia que no han recibido expresa competencia legal”*.

Se sugiere votar en contra del proyecto, ya que es la Contraloría General de la República quien tiene la facultad y competencia para velar por los derechos fundamentales de los funcionarios públicos. Hacer aplicable la tutela laboral a los funcionarios públicos genera una serie de problemas relacionados con las facultades que tendrá la Dirección del Trabajo versus las facultades de la Contraloría. Además, creemos que la interpretación que realiza el Tribunal Constitucional es adecuada, hoy los tribunales del trabajo conocen la vulneración de derechos ocasionado a trabajadores del sector privado, no de funcionarios públicos.

La Contraloría no ha podido manifestar su opinion respecto al proyecto, siendo que es el ente encargado hoy de velar por los derechos fundamentales de los funcionarios públicos. Esta ley sólo se hace necesario en la medida de que la Contraloría no este realizando adecuadamente sus funciones, y aún así, se debería legislar para segurar que la Contraloría realice su competencia como corresponde, sin alterar la institucionalidad vigente.

Finalmente, consideramos que el quorum de aprobación debiera ser de LOC, al incorporar y modificar atribuciones de los tribunales del trabajo, pero la comisión del Trabajo determinó que es de quorum simple (con el voto en contra de la Senadora Van Rysselberghe).

Por todo lo anterior, se sugiere votar en contra del proyecto de ley.

Proyecto de ley que establece normas contra la resistencia a los antimicrobianos

Boletín 12674-06

| | |
|--------------------------------|--|
| Tramitación | Primer trámite |
| Urgencia | Sin urgencia |
| Discusión | En general |
| Sugerencia votación | Abstención |
| Origen de la Iniciativa | Moción |
| Autores | Senadores: Chahuan, Girardi, Goic y Rabindranath |

Sugerencia de votación: Abstención

Objetivo del Proyecto

El proyecto busca que el Estado reconozca como un peligro para la salud de la población el desarrollo de resistencia antimicrobiana, además propone que el Estado tome medidas para evitar los riesgos asociados a dicho fenómeno y regular la cadena de transmisión de los agentes multirresistentes.

Contenido

El proyecto consta de catorce artículos y de tres títulos.

Se define los conceptos de Antimicrobiano, Resistencia Antimicrobiana, Agente Multirresistente, Profilaxis Animal con Antimicrobianos y Metafilaxis

Posteriormente se establece medidas para prevenir la proliferación de resistencia a los antimicrobianos y agentes multirresistentes, fundamentalmente por medio de protocolos, medidas de prevención y control en los establecimientos de salud en concordancia con el Plan Nacional Contra la Resistencia a los Antimicrobianos del año 2017 impulsado por el Ministerio de Salud, el cual está vigente hasta el año 2020.

Del mismo modo, el proyecto se inmiscuye en los procedimientos veterinarios, partiendo por prohibir la Metafilaxias (generar medidas de prevención masiva a un grupo de animales sano destinados al consumo humano, para prevenir potenciales infecciones o enfermedades), a su vez, restringe las posibilidades de aplicar profilaxis animal aplicable a animales no destinados al consumo humano. Esto se hace extensivo a la ley N°20.380 sobre protección de animales y la ley N°18.892, Ley General de Pesca y Acuicultura en donde se prohíbe la utilización de antimicrobianos con fines de engorda o de estimulación del crecimiento de animales y de especies hidrobiológicas.

Por último, se establecen las medidas para prevenir la resistencia a los antimicrobianos en tratamientos veterinarios, específicamente en el proyecto se prohíbe la metafilaxis y sólo se podrá practicar la profilaxis animal con antimicrobianos en los individuos no destinados al sacrificio o beneficio para el consumo humano.

Del mismo modo, establece que los titulares de registro, los productores, distribuidores, importadores, y toda entidad involucradas en el suministro y uso de antimicrobianos en el país, serán solidariamente responsables por los daños que cause administrar en animales utilizados para el beneficio y sacrificio humano, para lo cual la acción para perseguir esta responsabilidad prescribirá en el plazo de diez años, contado desde la manifestación del daño.

Conclusión

El proyecto a primera observación podría parecer positivo, sin embargo, se generan ciertas dudas en el ámbito de producción animal. Hace falta tener mayor información sobre el impacto que esto podría tener en la economía, en los distribuidores e importadores de carnes o pescados.

Se sugiere solicitar plazo para escuchar a invitados y al Ejecutivo para comprender las posibles repercusiones negativas que podría tener el proyecto.

Por el momento, se recomienda abstenerse.

Proyecto de ley que fija una ley marco de cambio climático

Boletín 13191-12

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Tramitación | Primer trámite constitucional |
| Urgencia | Suma |
| Discusión | En general |
| Sugerencia votación | A favor |
| Origen del proyecto original | Mensaje |

Objetivo

La iniciativa de ley en estudio tiene por objeto crear un marco jurídico que permita hacer frente a los desafíos que presenta el cambio climático, transitar hacia un desarrollo bajo en emisiones de gases de efecto invernadero, hasta alcanzar y mantener la neutralidad de emisiones de estos, reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia a los efectos adversos del cambio climático y dar cumplimiento a los compromisos internacionales asumidos por el Estado de Chile en la materia.

Antecedentes

El Ejecutivo ingreso el proyecto el 13 de enero del 2020, siendo aprobado en general por la comisión de Medio Ambiente el pasado 9 de julio, con los votos favorables de todos los senadores presentes: Allende, Órdenes, De Urresti, Durana y Prohens.

Contenido

Principios

El primer título de la norma establece un listado de principios que deben ser respetados al momento de establecer políticas, planes, programas, normas, acciones y demás instrumentos que se dicten o ejecuten en el marco de esta ley.

- Se destaca el rol de la ciencia, como principal orientador en la toma de decisiones, así como la adopción de medidas eficaces para enfrentar el cambio climático al menor costo ambiental, social y económico posible.
- Se consagra la equidad y transversalidad para priorizar la justicia social y ambiental en la acción climática.
- Se establece el principio de transversalidad, la que implica que todas las áreas de desarrollo del país se transforman para la mitigación y adaptación al cambio climático.
- Principio de costo efectividad: que las medidas que se apliquen sean lo más costo efectivas para las transformaciones que se necesitan realizar.

Instrumentos de gestión del cambio climático

El proyecto establece una meta de mitigación que consiste en alcanzar el año 2050, la neutralidad de emisiones de gases de efecto invernadero.

Para ello, se establecen los siguientes instrumentos de gestión a nivel nacional:

1. Estrategia climática de largo plazo: es el instrumento que define los lineamientos generales que seguirá el país de manera transversal e integrada, considerando un horizonte a 30 años para el cumplimiento del objeto de esta ley. Esta estrategia establece un presupuesto total a emitir gases de efecto invernadero al año 2030 y 2050, y los metas de adaptación por sectores, los que deben cumplirse en un plazo de 10 años.

Además, contiene lineamientos en materia de adaptación al cambio climático, así como evaluación de riesgos, considerando la vulnerabilidad de cada sector específico.

2. Contribución determinada a nivel nacional: este instrumento contiene los compromisos que nuestro país tiene ante la comunidad internacional, para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero e implementar medidas de adaptación.
3. Planes sectoriales de mitigación al cambio climático: este plan tiene por objeto establecer las acciones y medidas destinadas a dar cumplimiento a los presupuestos sectoriales de emisiones de gases de efecto invernadero, establecidos en la estrategia climática de largo plazo.
4. Planes sectoriales de adaptación al cambio climático: estos planes establecerán el conjunto de acciones y medidas para lograr adaptar al cambio climático a aquellos sectores con mayor vulnerabilidad y aumentar su resiliencia climática.
5. Planes de acción regional de cambio climático: esta iniciativa permite que los consejos regionales para el cambio climático elaboren planes de acción regional de cambio climático, los que tendrán por objeto apoyar la gestión de cambio climático, mediante la implementación de medidas territoriales, en concordancia con la estrategia climática de largo plazo y los planes sectoriales de mitigación y adaptación.
6. Planes estratégicos de recursos hídricos en cuencas: el Ministerio de Obras Públicas a través de la DGA, estará encargado de la elaboración de los planes estratégicos de recursos hídricos en cuencas, que tendrán por objetivo:

Identificar la oferta y demanda actual de agua superficial y subterránea, establecer el balance hídrico y sus proyecciones, diagnosticar el estado e información sobre cantidad, calidad, infraestructura e instituciones que intervienen en el proceso de toma de decisiones respecto al recurso hídrico y proponer un conjunto de acciones para enfrentar los efectos adversos del cambio climático sobre el recurso hídrico, propendiendo a la seguridad hídrica.

Normas de emisión de gases de efecto invernadero y los certificados de reducción de emisiones

Se establece por primera vez en nuestra legislación, normas de emisión de gases de efecto invernadero y certificados de reducción de emisiones.

1. La cantidad máxima de emisión de uno o más gases de efecto invernadero.
2. El estándar de emisiones de referencia por tecnología, sector y/o actividad.
3. El ámbito territorial y periodo en que aplicará la norma de emisión
4. Sinergias con otros instrumentos de gestión del cambio climático.
5. Se establece la obligación del Ministerio del Medio Ambiente de desarrollar normas que establezcan un límite a la emisión de gases de efecto invernadero para fuentes emisoras y agrupaciones de estos.
6. Se establece la posibilidad de que proyectos de tercero reduzcan o absorban emisiones de gases de efecto invernadero, accedan a certificados que podrán utilizarse para dar cumplimiento a los límites que establece la norma.
7. Se incentiva la transformación de los procesos productivos a tecnologías bajas en emisiones, así como el incentivo de proyecto y soluciones basadas en la naturaleza, como la forestación, captura de metano, energías renovables etc.

Institucionalidad para el cambio climático

Al Ministerio del Medio Ambiente, como Secretaría de Estado encargada de la integridad de la política ambiental y su regulación normativa, le corresponderá colaborar con el Presidente de la República en el diseño y aplicación de políticas, planes, programas y normas en materia de cambio climático.

Las autoridades sectoriales en materia de cambio climático son aquellas que tienen competencia en aquellos sectores que representan las mayores emisiones de gases de efecto invernadero o la mayor vulnerabilidad al cambio climático en el país. Esto es, los ministerios de Agricultura, Economía, Fomento y Turismo, Energía, Minería, Obras Públicas, Salud, Transportes y Telecomunicaciones, Defensa Nacional, Vivienda y Urbanismo y Medio Ambiente.

Se amplía el consejo de ministros para la sustentabilidad, ampliando a los ministerios de Educación y Ciencias.

Finalmente se crea un Comité Científico asesor para el cambio climático, de carácter independiente.

Comentarios

Esta ley permite a nuestro país tener una vez por todas, un marco jurídico que designe responsabilidades, establezca facultades y obligaciones de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Esta norma exige la implementación y reporte de medidas de mitigación y adaptación al cambio climático.

Esta iniciativa va a permitir establecer una gobernanza climática, las facultades y obligaciones de los órganos del Estado para la acción climática, tanto a nivel vertical (nacional, regional y municipal) como a nivel horizontal (distintos sectores). Se institucionaliza y orienta la acción del Estado a largo plazo, dejando puesta una meta de carbono neutralidad, otorgando al Estado la facultad de aplicar las mejores medidas según los cambios tecnológicos disponibles.

Esta ley marco, establece componentes y obligaciones esenciales para la gestión, dejando las acciones específicas para alcanzar cada meta sectorial a los sectores responsables y permite flexibilidad y autonomía para establecer acciones específicas, según las necesidades y condiciones cambiantes en el tiempo.

Sólo hay 36 países que tienen leyes de cambio climático en el mundo, y sólo hay 5 que tienen metas de carbono de neutralidad (Francia, Reino Unido, Suecia, Dinamarca y Suiza). Actualmente no existe país en desarrollo con compromiso de carbono de neutralidad antes del año 2050.

Los principales elementos de esta ley son:

1. Establecer una meta de mitigación.
2. Considerar instrumentos de gestión de largo, mediano y corto plazo.
3. Incorporar el cambio climático en otros instrumentos, como la planificación territorial, la gestión de riesgos de desastre etc.
4. Financiamiento e instrumentos económicos para llevar a cabo el cumplimiento de lo que establece la ley.
5. Se establece un sistema de información mediante un sistema nacional de inventarios, de prospectiva, plataforma de vulnerabilidad climática entre otros.
6. Se consagra una institucionalidad del cambio climático.

Se sugiere votar a favor de la idea de legislar, asegurando que, en la discusión en particular, se logre un equilibrio entre el desarrollo económico de nuestro país con el respeto y cuidado del medio ambiente.

Proyecto de Acuerdo de Complementación Económica nº 35, celebrado entre los Gobiernos de los Estados Partes del MERCOSUR y el Gobierno de la República de Chile, en Montevideo, el 12 de diciembre de 2018, que contiene el Acuerdo de Libre Comercio entre la República de Chile y la República Federativa de Brasil, suscrito en Santiago, Chile, el 21 de noviembre de 2018.

Boletín 13199-10

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| Tramitación | Segundo trámite constitucional |
| Urgencia | Discusión inmediata |
| Discusión | En general y particular |
| Sugerencia votación | A favor |
| Origen de la Iniciativa | Mensaje |
| Autores | Ejecutivo |

Sugerencia de votación: A favor

Objetivo

El objetivo del proyecto de acuerdo es aprobar el Sexagésimo Cuarto Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica N° 35, celebrado entre los Gobiernos de los Estados Partes del Mercosur y el Gobierno de la República de Chile, en Montevideo, el 12 de diciembre de 2018, que contiene el Acuerdo de Libre Comercio entre la República de Chile y la República Federativa de Brasil, suscrito en Santiago, Chile, el 21 de noviembre de 2018.

Antecedentes

El proyecto ingresó a la Cámara de Diputados el 14 de enero de 2020, y fue aprobado por la Sala de la Cámara el 6 de mayo de 2020, con 92 votos a favor, 44 en contra y 11 abstenciones. Los diputados de Chile Vamos votaron a favor del proyecto.

Durante su discusión en segundo trámite constitucional en el Senado, el acuerdo fue aprobado en la comisión de Relaciones Exteriores el 19 de mayo de 2020, con el voto favorable de los senadores, Letelier, Lagos Weber, Moreira, Ossandón y Pizarro. Además, fue aprobado por la comisión de Hacienda, el 8 de julio del presente año, con el voto favorable de los senadores Pizarro, Coloma, García Ruminot, Lagos Weber y Montes.

Contenido

Este proyecto de acuerdo busca complementar la liberación comercial arancelaria en materia de productos ya alcanzadas en el Acuerdo de Complementación Económica (ACE) nº 35, suscrito por Chile y los países del Mercosur el año 1996. Por otra parte, se busca modernizar la relación comercial con Brasil mediante la incorporación de diversas disciplinas originalmente no contempladas en el acuerdo, y actualiza las ya existentes.

Medidas sanitarias y fitosanitarias

Se busca mantener la protección de la salud de las personas, animales y vegetales, y a su vez facilitar el comercio entre ambos países. Para ello, se busca una mayor claridad y transparencia en la implementación de medidas sanitarias que pueden afectar el comercio. Se establece el reconocimiento de equivalencia, lo que permitirá una mayor coordinación entre ambos países. Por ejemplo, para el sector pesquero y acuícola, existen 168 establecimientos habilitados para exportar a Brasil, estas entidades en futuro, no tendrán que ser habilitadas por la autoridad brasileña, bastando la autorización de SERNAPESCA.

Eliminación de obstáculos técnicos al comercio.

Buscando una mayor transparencia en materia regulatoria, se establece un periodo de 60 días para consultas, lo que permitirá que países interesadas de Chile, puedan conocer con antelación cambios en las regulaciones que podrían afectar el comercio entre ambos.

Se contempla la creación de un comité encargado de abordar de manera bilateral todos aquellos obstáculos innecesarios al comercio.

Servicios

El acuerdo permite a los exportadores de ambos países tener mayor certeza jurídica al momento de exportar sus servicios. Se asegura el derecho a un trato no discriminatorio, lo que implica que las partes no podrán discriminar los bienes o servicios provenientes del otro país, para favorecer su producción interna.

Comercio electrónico

Se promueve el comercio electrónico por medio de normas que eliminan la discriminación por origen entre productos digitales, y se incentiva la competencia. Se realizará un reconocimiento mutuo de firmas electrónicas, permitiendo menos costos operativos para las MiPYMES.

Telecomunicaciones

Se elimina el roaming entre ambos países (luego de un año dese la entrada en vigencia). Es decir, los proveedores de telefonía móvil deberán cobrar las mismas tarifas que apliquen a los servicios móviles de su propio país.

Compras públicas

Se permitirá la participación de proveedores chilenos de bienes y servicios, en el mercado público más grande de Latinoamérica, en condiciones de igualdad en consideración a los proveedores locales, sin la necesidad de establecerse comercialmente en el país.

Materia laboral

Se asume el compromiso entre ambas partes de tener legislación que regule los derechos laborales internacionalmente reconocidos. Además, ambos países se comprometen a hacer cumplir su propia legislación laboral y no derogar u ofrecer derogar la legislación laboral con el fin de promover el comercio entre ambas partes.

Comercio y protección ambiental

Ambos países se comprometen a promover altos niveles de protección ambiental; así como, políticas comerciales y ambientales que se apoyen mutuamente. Se obligan a cumplir con su legislación medioambiental, sin modificar la legislación u ofrecer derogar la legislación con el fin de promover el comercio entre ambos.

Comentarios

Nuestro país siempre se ha caracterizado por ser uno de los países con más acuerdos de libre comercio en el mundo, lo que ha permitido a Chile un gran desarrollo económico durante las últimas décadas. Sin embargo, el 50% de las exportaciones se dirigen a China y EE. UU., por lo que es necesario diversificar los mercados, para no depender tanto de estos dos países.

Brasil tiene el 50% de la población sudamericana, y actualmente, se encuentra en un proceso de apertura comercial con el resto de los países de la región. Durante el 2019, Brasil fue el principal socio económico en la región, siendo el destino de 4,5% de las exportaciones de nuestro país al mundo, y el 30% del total de envíos en Latinoamérica.

Desde los 90, la relación comercial entre nuestro país y Brasil se rigió por el Acuerdo de Complementación Económica 35 (ACE 35) suscrito con los países del Mercosur, pero es necesario adecuar la normativa para modernizar los estándares de intercambio comercial incorporando nuevas disciplinas. El acuerdo vigente se enfoca en la comercialización de bienes entre ambos países.

Este nuevo acuerdo busca profundizar en aquellas disciplinas marginadas inicialmente en el acuerdo original, otorgando mayor certeza jurídica a exportadores e importadores de ambos países, resguardando al mismo tiempo las facultades regulatorias de cada Estado, con transparencia y seguridad para los flujos bilaterales de comercio. Entre las nuevas disciplinas que se incorporan en el tratado se encuentran las telecomunicaciones, el comercio electrónico, el comercio de servicios, el medio ambiente entre otros.

Por lo anterior, se sugiere votar a favor de la iniciativa.

Proyecto de ley que modifica la ley N° 20.584, sobre derechos y deberes del paciente, para autorizar el tratamiento de datos para el control de pandemia derivada del Covid-19.

Boletín 13452-11

| | |
|------------------------------|--|
| Tramitación | Primer trámite constitucional |
| Urgencia | Sin urgencia |
| Discusión | En general y particular |
| Sugerencia votación | A favor |
| Origen del proyecto original | Moción (indicaciones sustitutivas del Ejecutivo) |

Objetivo

Este proyecto autoriza a los Servicios de Atención Primaria de Salud y a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, con ocasión de una epidemia, pandemia o brote de ellas, y por razones de salud pública, a efectuar el tratamiento de datos personales, incluidos datos sensibles de salud, para hacer la trazabilidad y el control de cuarentena.

Antecedentes

El proyecto iniciado en moción de los senadores Girardi, Goic, Ossandón, Quintana y Sandoval, ingresó el 21 de abril del 2020 al Senado. El Ejecutivo presentó una indicación sustitutiva al proyecto, permitiendo regular materias que son de competencia exclusiva del Presidente de la República. El proyecto fue aprobado en general y particular por la comisión de Salud, con el voto unánime de los senadores presentes: Goic, Chahuán, Durana, Girardi y Quinteros.

Contenido

La norma consta de un artículo único, que modifica el artículo 13 bis de la ley 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención de salud.

Ideas centrales del proyecto:

- En caso de que se decrete alerta sanitaria por epidemia o pandemia, o brotes de la misma, se podrá autorizar a los Servicios de Atención Primaria de Salud y a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, el tratamiento de datos personales de las personas contagiadas y de sus contactos estrechos.

- Los Servicios de Atención Primaria de Salud deberán informar al Ministerio de Salud sobre los datos personales que consideren necesarios para el correcto cumplimiento de sus atribuciones. El Ministerio de Salud dará acceso a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública a los datos personales, para que sean utilizados durante la alerta sanitaria, y siempre que sean indispensables para dar cumplimiento a las medidas de control sanitario.
- Estos datos deberán ser eliminados de forma segura una vez terminado el periodo de alerta sanitaria, o cuando ya no sea necesario su tratamiento.
- Estos datos sólo podrán ser publicados, para fines científicos, académicos, estadísticos o para el control de la enfermedad, siempre manteniendo el anonimato e las personas, protegiéndolos de eventuales actos de discriminación.
- Queda prohibido comunicar o ceder los datos a terceros no autorizados. Quien haga mal uso de los datos, será sancionado con penas de reclusión menor en sus grados medio a máximo, además de sanciones de carácter administrativa que corresponda.

Comentarios

Esta ley va a permitir aumentar las herramientas que hoy existen para combatir el control de la pandemia, mejorando las cifras de trazabilidad y contención del virus. Quienes hagan mal uso de estos datos personales, serán sancionados, ya que el resguardo del anonimato es importante para evitar todo tipo de discriminaciones que se puedan ejercer contra las personas contagiadas.

Se sugiere votar a favor del proyecto de ley.

Proyecto de ley que modifica el código de trabajo para posibilitar el trabajo a distancia o teletrabajo a la trabajadora embarazada, en casos de alerta sanitaria por causa de epidemia de una enfermedad contagiosa.

Boletín 13553-13

| | |
|--------------------------------|---|
| Tramitación | Segundo trámite constitucional. |
| Urgencia | Suma |
| Discusión | En general y particular |
| Sugerencia votación | A favor |
| Origen de la Iniciativa | Moción |
| Autores | Diputados Sandra Amar, Jaime Bellolio, Karol Cariola, Francisco Eguiguren, Paulina Nuñez, Maite Orsini, Joanna Pérez, Marcela Sabat y Frank Sauerbaum |

Sugerencia de votación: Votar a favor

Objetivo del Proyecto

El proyecto de ley tiene tres grandes objetivos:

- Incluir en el Código del Trabajo la obligación del empleador de ofrecer a la trabajadora embarazada durante un estado de excepción constitucional de catástrofe a causa de una enfermedad contagiosa, la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo, sin reducción de remuneraciones o destinarla a labores que no requieran contacto con público.
- Permitir, durante la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública, la emisión simultánea de licencias médicas por enfermedad grave del niño o niña menor de un año.
- Prorrogar el fuero maternal cuyo término ocurra durante la vigencia del referido estado de excepción constitucional.

Antecedentes

El proyecto ingresó a la Cámara de Diputados el 29 de mayo del año en curso, siendo aprobado por la Sala unánimemente el 5 de agosto.

En su segundo trámite en el Senado, el proyecto fue aprobado por la comisión de Trabajo con el voto favorable de los senadores Goic, Sabat y Letelier el 19 de agosto.

Contenido

El artículo consta de tres artículos que modifican el Código del Trabajo que consagra lo siguiente:

Obligación del empleador de ofrecer teletrabajo a las trabajadoras embarazadas:

- Durante el estado de Excepción constitucional, los empleadores deberán ofrecer a la empleadora embarazada trabajar a distancia o teletrabajo, en la medida que las funciones lo permitan y la trabajadora consienta en ello.
- Si no es posible ejercer teletrabajo, se le deberá asignar labores que no requieran contacto con público o con terceros que no desempeñen funciones en el lugar del trabajo.

Emisión de licencias por enfermedad grave del niño menor de 1 año

- Las licencias medicas por enfermedad grave de un menor de 1 año podrán ser emitidas o tramitadas simultáneamente. La Isapre y COMPIN no podrán rechazar estas licencias medicas.

Extensión del fuero maternal

- Se extiende el fuero maternal por el tiempo que dure el actual Estado de Excepción Constitucional.
- Se extiende el fuero:
 - Padre o quien le fuere otorgada la custodia del menor, si la madre muriera en el parto o durante el periodo de permiso posterior a él
 - Mujeres u hombres solteros o viudos que manifiestan al tribunal su voluntad de adoptar un hijo y obtengan el cuidado personal del niño.

Comentarios

Este proyecto, y el apoyo transversal que ha recibido, demuestra la gran importancia que tiene el teletrabajo durante la pandemia. El proyecto busca dar una protección especial a mujeres embarazadas, permitiendo que realicen trabajo a distancia, o de ser imposible, reducir el contacto que tengan con el público.

Se sugiere votar a favor del proyecto de ley.

Proyecto de ley establece suspensión de la evaluación docente y las pruebas del sistema de medición de la educación (SIMCE) durante el año 2020, debido a la pandemia mundial

Boletín 13554-04

| | |
|-------------------------|---|
| Tramitación | Segundo trámite constitucional |
| Urgencia | Sin urgencia |
| Discusión | Discusión general |
| Sugerencia votación | En contra |
| Origen de la Iniciativa | Moción |
| Autores | Diputados: Rodrigo González, Camila Rojas, Juan Santana, Camila Vallejo |

Sugerencia de votación: En contra

Objetivo del Proyecto

El proyecto de ley tiene por objeto suspender la realización de la Evaluación Docente del año en curso, debido a la pandemia. Se propone posponer el proceso para el año 2021, sin perjuicio de realizar la evaluación a los profesionales de la educación que manifiesten expresamente su voluntad de realizarlo.

Antecedentes

El proyecto ingresó a la Cámara de Diputados el 12 de mayo del 2020, siendo aprobado en general el 17 de junio. El 24 de junio el proyecto de ley fue aprobado en particular. Se rechazó las normas relativas al SIMCE, por no alcanzar el quorum (4/7), y se aprobaron las normas sobre la suspensión de la evaluación docente y el sistema de desarrollo profesional.

En el Senado, el proyecto fue aprobado en general por la comisión de Educación el 14 de julio con el voto favorable de los senadores Provoste, Montes y Quintana, y el voto en contra de la senadora Von Baer y García Ruminot.

Contenido

El proyecto de ley consta de dos artículos que modifican la aplicación de la ley Nº 19.070 que aprueba el Estatuto de los Profesionales de la Educación.

Artículo 1º

- Suspende la realización de la Evaluación Docente contemplada en el artículo 70 de la ley 19.070, para el año 2020 debido a la pandemia.
- Los profesionales de la educación que les corresponde realizar la evaluación docente el 2020, podrán realizarlo el 2021.

Artículo 2º

- Establece que no se impide realizar la evaluación docente durante el 2020 a quienes manifiesten expresamente realizarla.

Comentarios

No se entiende el real sentido del proyecto de ley o su utilidad, toda vez que los docentes pueden solicitar de forma individual no realizar la evaluación docente. Es más, 30.982 docentes han cumplido con su obligación de inscribirse para la prueba y 16.672 la han suspendido.

La situación ha sido resuelta a nivel reglamentario. El artículo 7º del decreto n°192 que regula la evaluación docente, donde establece la posibilidad de que el docente puede solicitar la suspensión por un año por razones de fuerza mayor. Es por esto que, a quienes han solicitado dicha suspensión, se les ha acogido, en el entendido que la pandemia es una razón de fuerza mayor.

Cabe destacar que el proyecto de ley es inadmisibles, ya que se vulnera el artículo 65, 4º Nº2 de la Constitución. Este artículo señala las materias de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, indicando en el numeral 2 la facultad de crear, suprimir y determinar funciones de órganos públicos. En este proyecto se modifica una facultad que le corresponde al Ministerio de educación, ya que le corresponde administración, aplicación, ejecución y coordinación técnica de la evaluación docente.

Por lo anterior, se sugiere votar en contra del proyecto de ley.

Proyecto de ley que establece medidas tributarias que forman parte del plan de emergencia para la reactivación económica y del empleo.

Boletín 13615-05

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Tramitación | Informe Mixta |
| Urgencia | Discusión Inmediata |
| Discusión | Informe Mixta |
| Sugerencia votación | Aprobar |
| Origen de la Iniciativa | Mensaje |

Sugerencia de votación: Aprobar.

Objetivo del Proyecto

Promover la reactivación económica, inyectando liquidez a las pequeñas y medianas empresas, mediante cuatro medidas tributarias transitorias que permitan al país, por una parte, volver a crecer, crear nuevos y mejores empleos, y apoyar decididamente a los emprendedores, y, por la otra parte, proteger las fuentes de trabajo, todo ello, en el contexto del acuerdo alcanzado el 14 de junio respecto de un Marco de Entendimiento para un Plan de Emergencia por la Protección de los Ingresos de las Familias y la Reactivación Económica y del Empleo.

Antecedentes

El proyecto fue ingresado por el Ejecutivo al Senado el 25 de junio del presente año y fue aprobado en general por la Cámara de Diputados el 7 de julio con 115 votos a favor, 14 en contra y 21 abstenciones. Los Diputados de Chile Vamos votaron a favor, y los Diputados del Frente Amplio y del PC votaron en contra o se abstuvieron.

En el Senado, el proyecto fue aprobado en general y en particular por la Comisión de Hacienda por la unanimidad de los Senadores presente, incluyendo el voto favorable del Senador Coloma. La Sala del Senado rechazó en general el proyecto de ley el 5 de agosto, con 16 votos a favor, 24 votos en contra y 1 abstención, formándose una comisión mixta.

Contenido

El proyecto de ley propone cuatro medidas tributarias que tienen por objeto inyectar liquidez y promover la reactivación económica:

1. Rebaja a la mitad del Impuesto de Primera Categoría del Régimen Pro Pyme para los años 2020, 2021 y 2022.
2. Devolución de crédito fiscal IVA acumulado para Pymes.
3. Ampliación depreciación instantánea de 100% hasta el 31 de diciembre de 2020.

4. Destinación de recursos fiscales para la contribución regional de 1% para proyectos iniciados hasta el 2021.

I. Rebaja a la mitad del impuesto de Primera del Régimen Pro Pyme para los años 2020, 2021 y 2022.

- Se reduce el impuesto de 25% a un 12,5% para las empresas acogidas al Régimen Pro-Pyme.
- Se disminuye a la mitad el pago de los Pagos Provisionales Mensuales (PPM) para las empresas acogidas al Régimen Pro-Pyme.

II. Devolución de crédito fiscal IVA acumulado para Pymes.

El proyecto efectúa un reembolso del IVA soportado por las Pymes en la adquisición de bienes o utilización de servicios entre enero y mayo de 2020.

Requisitos:

1. Que mantengan un saldo acumulado a junio de 2020.
2. Que, producto de la crisis sanitaria, presenten una disminución de sus ingresos¹.
3. Que no se encuentren en alguna de las causales que contempla el artículo 59 bis del Código Tributario.
 - a. Presentar inconsistencias tributarias
 - b. Incurrir reiteradamente en infracciones.
 - c. No mantener las instalaciones mínimas para el desarrollo de la actividad o giro declarado.
 - d. No estar formalizado o acusado conforme al Código Procesal Penal por delito tributario.
4. Que hayan presentado todas sus declaraciones del Impuesto al Valor Agregado de los últimos 36 periodos tributarios.
5. No mantener deuda tributaria, salvo los contribuyentes que se encuentren cumpliendo convenio de pago ante la Tesorería General de la República.

Procedimiento

El reembolso se deberá solicitar ante el SII en julio, agosto o septiembre, y la Tesorería General de la República efectuará el reembolso, dentro del plazo de 10 días desde que se realiza la solicitud.

Normas de Control

Se establece la obligación de restitución adicional si:

- Se realizan operaciones exentas.
- Crédito IVA está mal determinado.
- Hubo termino de giro previo a la restitución total.

¹ Al menos, el 30%, respecto del promedio del mismo tipo de ingresos obtenidos en igual periodo de 2019.

III. Ampliación depreciación instantánea de 100% hasta el 31 de diciembre de 2022.

El presente proyecto propone ampliar la depreciación instantánea de 100% para las inversiones realizadas en todo el país, hasta el 31 de diciembre de 2022. Adicionalmente, se incorpora un régimen de amortización instantánea respecto de ciertos activos intangibles que estén protegidos en conformidad con la ley, a saber, propiedad industrial, derechos de autor y nuevas variedades vegetales, reconociendo así las diversas formas de inversión y desarrollo tecnológico que dan cuenta de una economía cada vez más digitalizada.

IV. Destinación de recursos fiscales para la contribución regional de 1% para proyectos iniciados hasta el 2021.

Se propone destinar recursos fiscales para enterar la contribución que se devengue respecto de proyectos que se sometan a la Evaluación de Impacto Ambiental hasta el 31 de diciembre de 2021, liberándolos por tanto de la misma, en la medida que se inicie la ejecución de las obras en un plazo no superior a 3 años.

Modificaciones en la Comisión Mixta

Tras el rechazo en su totalidad del proyecto en el senado, se constituyó una Comisión Mixta.

La comisión mixta sugiere aprobar el proyecto en los mismos términos que lo hizo la Cámara de Diputados con los siguientes cambios:

1. Se permite la depreciación instantánea de los activos intangibles, lo que fue rechazado originalmente en la Cámara.
2. Se posterga el plazo de entrada en vigencia de la obligación de emitir boleta electrónica aplicable para quienes ya son facturadores electrónicos, desde septiembre 2020 a enero de 2021
3. Se otorgará un bono y un préstamo solidario a los microempresarios del sector de transporte. Estos beneficios no están afectos a impuestos ni a retenciones, salvo las de deudas por pensiones alimenticias.

El bono es a los microempresarios del transporte y a los conductores de transporte remunerado, la que asciende a 350.000 pesos por única vez, siendo compatible con los demás beneficios estatales a causa del COVID-19.

El préstamo es de 320.500 pesos mensuales, el que se puede pedir hasta 3 veces. El préstamo sólo se reajusta por IPC, no devenga intereses y tiene un año de gracia.

¿Quiénes pueden solicitar este beneficio?

1. Propietarios de vehículos inscritos en el Registro Nacional de Servicio de Transporte de Pasajeros, en la modalidad de taxi básico o taxi colectivo.
2. Propietarios de vehículos inscritos en el Registro Nacional de Servicio de Transporte de Pasajeros como transporte público urbano y rural prestado por buses, taxibuses y minibuses

que presten servicios en todo Chile, excepto la provincia de Santiago y las comunas de San Bernardo y Puente Alto.

3. Propietarios de vehículos inscritos en el Registro Nacional de Servicio de Transporte de Escolares.

Comentarios

El Gobierno anunció un Plan Económico de Emergencia el 19 de marzo y complementado el 8 de abril, consideró una movilización de recursos por hasta aproximadamente US\$17.000 millones, correspondientes a cerca de un 7% del PIB. Luego, se logró un acuerdo el 14 de junio en materia de medidas sanitarias y económicas para enfrentar la pandemia, con el acuerdo de diversos sectores políticos, teniendo como resultado, en parte, la presentación de este proyecto de ley.

Es urgente incentivar la inversión privada y la reactivación de nuestra economía. La OCDE sugiere y promueve el empleo de herramientas tributarias para incentivar la demanda de bienes de inversión y de consumo para lograr una rápida recuperación económica.

Se sugiere votar a favor de la iniciativa.

Proyecto de ley que flexibiliza transitoriamente los requisitos de acceso e incrementa el monto de las prestaciones al seguro de desempleo de la ley N° 19.728, con motivo de la pandemia originada por el Covid-19, y perfecciona los beneficios de la ley N° 21.227.

Boletín 13624-13

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Tramitación | Tercer trámite constitucional |
| Urgencia | Discusión inmediata |
| Discusión | Única |
| Sugerencia votación | A favor |
| Origen del proyecto original | Mensaje |

Objetivo

El proyecto de ley tiene los siguientes objetivos:

1. Modificar los requisitos de acceso a los fondos de cesantía para los trabajadores que se encuentren cesantes o que quedaren cesantes después de haber percibido alguna de las prestaciones a que se refiere el Título I de la ley de protección al empleo y no cumplan los requisitos establecidos en la ley N°19.728, sobre seguro al desempleo. Dicho acceso excepcional durará hasta el 31 de octubre de 2020.
2. Aumentar el monto de las prestaciones asociadas al seguro de desempleo.
3. Aplicar las nuevas tablas de cobertura aplicables al seguro de desempleo de la ley N° 19.728, a las prestaciones por suspensión del contrato de trabajo.
4. Posibilitar el acceso de las trabajadoras y de los trabajadores de casa particular, que tengan suspendidos sus contratos de trabajo o por motivos de cuidado, al Ingreso Familiar de Emergencia.

Antecedentes

El proyecto iniciado en mensaje ingresó el 1 de julio del 2020 al Senado. El proyecto fue aprobado en general (votación unánime incluyendo el voto favorable de la Senadora Van Rysselberghe) y en particular por la Comisión de Trabajo. En la comisión de Hacienda, el proyecto fue discutido en general y particular a la vez, siendo aprobado con el voto favorable del Senador Coloma, el 4 de agosto.

En su segundo trámite, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto en general y en particular con modificaciones

Contenido

I. Flexibilización de los requisitos para acceder al seguro de cesantía

Podrán acceder de forma transitoria al seguro de cesantía las siguientes personas:

1. Cesantes que cumplen los requisitos de cotización para acceder a la Ley de Protección del Empleo.

Estamos hablando de personas que registran 3 cotizaciones continuas anteriores al término de contrato o 6 cotizaciones mensuales continuas o discontinuas en los últimos 12 meses anteriores al mes de término de contrato, siempre las últimas 2 cotizaciones sean continuas y con el mismo empleador.

2. Cesantes que no cumplen los requisitos de cotizaciones para acceder al seguro de cesantía ni a la Ley de Protección del Empleo.

Si estas personas tienen recursos en su cuenta individual por cesantía, tendrán el derecho de retirar el dinero.

II. Incremento de las prestaciones del Seguro de Cesantía y Ley de Protección al Empleo

Se incrementa de forma transitoria las tasas de reemplazo vigentes en el seguro de cesantía y se mejoran las prestaciones de la Ley de Protección al Empleo.

¿Quiénes son beneficiarios de esta modificación?

Trabajadores que accedan al seguro de cesantía:

1. Personas que se encuentran cesantes y que cumplen con los requisitos para acceder al seguro de cesantía, según las disposiciones permanentes (ley actual).
2. Personas que se encuentran cesantes que cumplen con los requisitos para acceder transitoriamente al seguro de cesantía (requisitos transitorios con este proyecto).
3. Personas que se encuentran cesantes que no cumplen los requisitos anteriores, pero que tienen recursos en su cuenta individual por cesantía.

Trabajadores que se acogen al Título 1 de la Ley de Protección al Empleo

En este caso, nos referimos a trabajadores que cuyos contratos de trabajo se encuentran suspendidos, ya sea por acto o declaración por parte de la autoridad o por pacto.

¿Cómo se lleva a cabo el incremento de las prestaciones del seguro de cesantía y de la Ley de Protección al Empleo?

Se mejoran las tasas de reemplazo actualmente vigentes, tanto en el seguro de cesantía como en la Ley de Protección al Empleo, actualizándose valores superiores e inferiores de las tablas y se mejora el número de giros para trabajadores que utilicen el Fondo de Cesantía Solidario.

Modificaciones a las Tablas

I. Tabla Cuenta Individual por Cesantía¹

Como ya señalamos, quien se encuentre cesante y no cumple con los requisitos para acceder a la Ley de Protección al Empleo ni al seguro de cesantía, podrán acceder al seguro de cesantía, con cargo a su cuenta individual por cesantía:

| | Giro 1 | Giro 2 | Giro 3 | Giro 4 | Giro 5 | Giro 6 | Siguientes |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Con Proyecto | 70% | 55% | 55% | 55% | 55% | 50% | 50% |
| Sin Proyecto | 70% | 55% | 45% | 40% | 35% | 30% | 30% |

II. Tabla Fondo de Cesantía y Ley de Protección al Empleo²

La legislación actual distingue entre quienes tienen contrato a plazo indefinido y quienes tienen contratos a plazo fijo o por una obra, trabajo o servicio determinado. El proyecto de ley mejora y equipara las tablas del seguro de cesantía y de la Ley de Protección al Empleo, sin distinguir tipo de contrato de trabajo, para giros que se realicen con cargo al Fondo de Cesantía Solidario, salvo los giros 5, 6 y 7.

¹Tabla proporcionada por el Ministerio del Trabajo

²Tabla proporcionada por el Ministerio del Trabajo

| Meses | Porcentaje promedio remuneración | Valor superior | Valor inferior |
|---------|----------------------------------|----------------|----------------|
| Primero | 70% | \$652.956 | \$225.000 |
| Segundo | 55% | \$513.038 | \$225.000 |
| Tercero | 55% | \$513.038 | \$225.000 |
| Cuarto | 55% | \$513.038 | \$225.000 |
| Quinto | 45% | \$419.757 | \$225.000 |

Otras modificaciones

1. Incremento del quinto giro del fondo de cesantía solidario: en caso de cumplirse con ciertos parámetros definidos en un decreto supremo, el quinto giro (50%) puede incrementarse hasta un 55% del promedio de la remuneración.
2. Nuevos giros sexto y séptimos del fondo de cesantía solidario: en caso de cumplirse con parámetros definidos en un decreto supremo, se implementarán un nuevo sexto y séptimo giro, pudiendo alcanzar hasta un 45% de la remuneración promedio.
3. Se prorroga la vigencia de la ley de protección del empleo para suscribir pactos de reducción de jornada, hasta el 31 de julio de 2021.
4. Las normas relativas al acceso y pago de prestaciones de la ley de protección del empleo y del seguro de cesantía estarán vigentes hasta el día 31 de octubre de 2020.

Modificaciones introducidas en las comisiones de trabajo y hacienda.

1. Se permitirá extender la vigencia de la Ley de Protección al Empleo por hasta 5 meses mediante decreto supremo, en caso de que exista la necesidad objetivo que lo amerite.
2. Aumento del quinto giro con cargo al fondo de cesantía solidario para trabajadores que les corresponda percibir dicho giro al momento de publicarse la ley. En este caso el porcentaje promedio de remuneración sobre el cual se calculará dicho giro será el 55% y no de 40%.
3. Se aumenta de 55% a 70% el porcentaje promedio de remuneraciones del 1er giro con cargo al fondo de cesantía solidario al que accederán los cesantes o trabajadores con contrato a plazo fijo o para una obra, trabajo o servicio determinado.
4. Los trabajadores de casa particular que tengan suspendidos sus contratos de trabajos, no se les considerará que perciban rentas de trabajo, para efectos de postular al IFE.

Modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados

1. Gracias a Diputados de oposición, se aprobaron dos indicaciones relacionados a trabajadoras de casas particulares.
 - a. El primero señala que los montos percibidos por trabajadores de casas particulares por concepto de seguro de cesantía, no serán considerados como ingresos para efectos de postular al IFE.
 - b. El segundo señala que una vez agotado los recursos acumulados en la cuenta individual de indemnización de 4.11% de las trabajadoras de casa particular, comenzará a operar el Fondo de Cesantía Solidario en iguales condiciones de porcentaje que los demás trabajadores. Esta indicación es inadmisibles por ser materia exclusiva del Presidente de la República, ya que incide en materia de seguridad social y administración financiera

del Estado. El Diputado Melero solicitó que fuera declarada inadmisibile sin éxito durante la tramitación del proyecto en a la comisión de Trabajo de la Cámara.

2. Se incorporó un artículo 16 nuevo que señala que permite a trabajadores celebrar nuevos contratos de trabajo de carácter transitorio con otros empleadores, sin que por ello pierdan el vínculo laboral ni el pago de prestaciones provenientes del seguro de cesantía.

Si bien la indicación esta bien intencionada, genera un grave problema respecto a la certeza jurídica, ya que no se pone fin a la relación contractual inicial, y los ingresos que perciben por el nuevo trabajo no se considerarán para disminuir el aporte que reciben por el seguro de cesantía. Esto permitiría que quienes realmente no requieran de un aporte del seguro de cesantía lo obtengan de igual manera.

3. Se agrega un nuevo artículo 17, el cual prohíbe a los empleadores discriminar a los trabajadores, una vez que reintegren sus trabajos, por haber suspendido su relación laboral de forma unilateral por acto de la autoridad. Esta indicación es sensata y busca que no se castigue a quienes no lograron un acuerdo mutuo con el empleador para congelar los efectos del contrato.

Comentarios

El proyecto de ley cumple con sus tres principales objetivos:

1. Permite acceder al seguro de cesantía a personas desempleadas que en condiciones normales no podrían acceder por no cumplir con los requisitos establecidos en la ley. Este proyecto relaja los requisitos para ello, exigiendo 3 cotizaciones continuas o 6 discontinuas en 12 meses, siempre que las 2 últimas sean con el mismo empleador.
2. Los trabajadores desempleados y con pactos de protección mejoran tasa de reemplazo, recibiendo 55% entre el segundo y el quinto giro.
3. Se aumenta el monto y los giros de las prestaciones de la Ley de Protección del Empleo.

Este proyecto es sumamente positivo, tomando en cuenta que al 19 de julio, 112.117 empresas han usado la suspensión de contratos contemplados en la Ley de Protección al Empleo. El 77% de las empresas mencionadas son microempresas, las que sumadas a las pequeñas empresas llegan a más del 95% del total. En total, hay 693.139 trabajadores acogidos a pactos de suspensión, y en reducción de jornada existen 40.000 pactos suscritos. Con este proyecto de ley se amplía el universo de beneficiados y se permite extender la vigencia de la Ley de Protección del Empleo, mediante decreto. Este proyecto va a ser fundamental a la hora de realizar una transición paulatina hacia el desconfinamiento y la reactivación económica.

Por lo anterior, se sugiere votar a favor del proyecto de ley, votando en contra de las dos primeras modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados.

Proyecto de ley que regula condiciones sanitarias para el funcionamiento de ferias libres

Boletín 13632-11

| | |
|-------------------------|---|
| Tramitación | Primer trámite constitucional |
| Urgencia | Sin urgencia |
| Discusión | Discusión general |
| Sugerencia votación | Aprobar |
| Origen de la Iniciativa | Moción |
| Autores | Chahuan, Ebensperger, Girardi, Goic y Quinteros |

Sugerencia de votación: A favor

Objetivo del Proyecto

De acuerdo al tenor de la moción, este proyecto persigue regular las condiciones sanitarias de funcionamiento de las ferias libres, a través de medidas preventivas, con la finalidad de eliminar o disminuir la propagación de posibles contagios de enfermedades transmisibles, tales como aquellas capaces de provocar epidemias o pandemias. A dicho efecto consagra una serie de definiciones y establece regulaciones obligatorias sobre el emplazamiento y el funcionamiento de las ferias, que incluyen horarios, capacitación y medidas preventivas para feriantes y público y manejo y disposición de residuos. Asigna funciones de control a las municipalidades y a la autoridad administrativa competente, en período de pandemia.

Antecedentes

El proyecto ingresó al senado el 7 de julio de 2020, siendo finalmente aprobado por la comisión de Salud con la unanimidad de los Senadores de la Comisión, incluyendo el voto favorable de la Senadora Luz.

Contenido

El proyecto de ley consta de 7 artículos que tienen las siguientes ideas centrales:

- Para elegir el funcionamiento de una feria libre, se establece que se privilegiará uno que provoque el menor impacto posible a los vecinos del sector.

- Se establecen condiciones generales de funcionamiento, estableciendo recomendaciones generales y preventivas:

Recomendaciones Generales:

- o Se capacitará a feriantes para detectar síntomas de enfermedades transmisibles
- o Se instruye realizar el lavado frecuente de manos
- o Se contempla un horario de atención especial y diferenciado para adultos mayores y embarazadas.

Recomendaciones preventivas

- o Uso de elementos de protección personal por parte del feriante.
 - o Uso de alcohol gel antes, durante y después de cada transacción
 - o Que el alcohol gel este disponible para el comprador.
 - o Distanciamiento de al menos tres metros en cada puesto.
 - o Sanitización de utensilios de trabajo y venta.
 - o Promoción de medio de pago alternativos al dinero.
- Las autoridades y los feriantes deberán promover las medidas de autocuidado.
 - Se deberá medir la temperatura corporal de todos los feriantes y descartar la existencia de síntomas de la enfermedad
 - Se deberá limitar la cantidad de personas que pueden ingresar a la feria.
 - Cada cierto tiempo (45 minutos) se deberá limpiar y desinfectar las superficies y el ambiente.
 - Se deberá instalar cada 100 metros una estación de lavado de manos con agua y jabón.
 - El publico que asista deberá tomar todas las medidas de prevención, incluyendo el uso de mascarilla y guantes, mantener distancia social, utilizar alcohol gel y preferir medios de pago alternativos al dinero físico.
 - Los residuos de los elementos de protección personal deberán ser depositados en bolsas plásticas para evitar la dispersión del contenido.
 - La fiscalización se realizará por parte del municipio y la autoridad sanitaria competente.

Comentarios

En esta etapa de volver paso a paso a la normalidad, es importante hacer un enfoque en la recuperación económica por medio de la protección y creación de empleos. Muchas familias de

nuestro país trabajan y dependen de las ferias al aire libre, por eso es importante asegurar su fuente de trabajo, pero evitando un alza en los niveles de contagios de Covid-19.

El proyecto en este sentido busca establecer normas que permitan el funcionamiento de las ferias, pero realizando medidas que permitan disminuir el riesgo de contagios.

Se sugiere votar a favor del proyecto, solicitando un plazo de indicaciones.

Proyecto de ley que modifica la ley N°19.968, que Crea los Tribunales de Familia, para incorporar disposiciones transitorias de regulación de medidas de retención judicial de fondos previsionales y de suspensión de la tramitación de la solicitud de retiro de fondos en razón de deudas por obligaciones alimentarias.

Boletín 13682-07

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| Tramitación | Segundo trámite constitucional |
| Urgencia | Discusión inmediata |
| Discusión | En general |
| Sugerencia votación | A favor |
| Origen de la Iniciativa | Mensaje |
| Autores | Ejecutivo |

Sugerencia de votación: A favor

Objetivo

El proyecto busca fortalecer las medidas cautelares que permitan garantizar el derecho de alimentos, a través de la retención de los fondos previsionales, cuyo retiro ha sido facultado mediante la reforma constitucional aprobada por la ley de retiro del 10% de las pensiones.

Antecedentes

El Ejecutivo ingresó este proyecto a la Cámara de Diputados el 31 de julio de 2020, siendo aprobado por la Cámara el 5 de agosto, en general y particular, con 149 votos a favor, 0 votos en contra y ninguna abstención. El proyecto de ley fue aprobado unánimemente, en general, por la comisión de constitución del Senado el 10 de agosto.

Contenido

Las medidas cautelares tienen por objeto asegurar el resultado del proceso, por ende, estamos frente a un proceso judicial ante tribunales de familia relacionado al derecho de alimentos, ya sea para solicitar por primera vez alimentos, o para aumentarlo, etc. En este caso específico, la medida cautelar solicitada, tendrá por finalidad la retención del 10%¹ de los fondos previsionales que puede retirar el alimentante (quien debe alimentos).

¹ El monto total al cual tiene derecho el alimentante, pudiendo ser el 10% del monto total o más.

Medida Cautelar ¿Cómo funciona?

1. Se solicita al tribunal ejercer la medida cautelar durante un juicio sobre alimentos.
2. El tribunal deberá resolver de plano, en un plazo máximo de 48 horas, si otorga o no la medida cautelar solicitada. En esta etapa la deuda no se encuentra liquidada, es decir, no se encuentra determinado el monto exacto que debe el deudor de la pensión de alimentos.
3. Acogida la solicitud, el tribunal notificará a la AFP por medios electrónicos y en el más breve plazo. Si se desconoce la AFP correspondiente, se notificará a todas ellas. Lo importante es que se notifica primero a la AFP, y no al deudor de alimentos, para que éste no pueda retirar los dineros y vulnerar la medida.
4. La AFP deberá notificar al respectivo afiliado o beneficiario de pensión de sobrevivencia por medios electrónicos o carta certificada de la medida cautelar.
5. La medida de retención tendrá valor durante todo el tiempo en que se mantenga la causa que la ha motivado, sin la necesidad de renovación.

Nómina de deudas liquidadas

Los tribunales de familia deberán remitir a las AFPs una nómina indicando las personas que al día de remisión registren deudas derivadas de pensiones alimenticias que han sido invocadas ante los tribunales y que se encuentran liquidadas.

Si la AFP ya realizó la retención previa, con la notificación de la nómina, tendrá que retener los fondos hasta el monto que efectivamente se debe pagar por alimentos. Si no hay retención previa, con la notificación de esta nómina, se procede a retener los fondos que el afiliado solicitó retirar o pueda solicitar retirar.

Consulta a los solicitantes del retiro de fondos.

Las AFPs tendrán la obligación de preguntar al afiliado que soliciten el retiro de fondos, si tiene deudas impagas originadas por obligaciones alimenticias ordenadas por resolución judicial. Si el solicitante responde que tiene deudas alimenticias pendientes de pago, se suspende la tramitación del retiro de fondos, la que podrá retomar su curso una vez que se acredite el pago de los alimentos.

¿Que ocurre cuando el afiliado ya hizo el retiro?

En este caso la AFP que recibe la orden de retención de los fondos ya retirados, deberá informar al Tribunal de dicha circunstancia, señalando el domicilio del solicitante, el detalle del monto retirado, la fecha en que se solicitó el retiro, la fecha de entrega de los fondos y la respuesta que esta persona dio a la AFP ante la consulta de si tenía deudas impagas de alimentos. Si el solicitante responde que no tiene deudas pendientes de alimentos, cuando en realidad si los tiene, esa información deberá ser remitida al Ministerio Público.

Es importante destacar que la medida de retención de los fondos se puede tramitar ante el tribunal **antes de que el afiliado haya efectuado la solicitud de retiro**, de lo contrario, el solicitante podría retirar el dinero antes que la AFP tuviera la orden de retener el monto, vulnerando así su obligación.

Comentarios

Este proyecto es positivo, ya que va a permitir a muchas mujeres obtener el pago de sus pensiones alimenticias, sin embargo, este proyecto sólo tendrá vigencia durante el año que se encuentra en regimen el retiro del 10% de las pensiones. Por lo anterior, hay que ir en búsqueda de una legislación permanente que solucione el gran problema que hay en nuestro país en torno a la pensión alimenticia.

Nuestro ordenamiento jurídico no regula de forma uniforme y orgánica las pensiones de alimentos, y urge tener una ley moderna, que establezca un procedimiento rapido para la petición de alimentos, sanciones eficaces para quienes no cumplan con el pago, y que permita ir desarrollando un cambio de mentalidad de nuestro país. Para ello, el Ejecutivo a construido una mesa técnica compuesto por Senadores, Diputados, jueces y expertos, con la finalidad de lograr un texto consensuado que permita solucionar la grave situación que viven miles de niños, que no reciben su pensión alimenticia.

El 84% de las pensiones de alimentos **no se pagan**, generando una deuda que supera los \$180 mil millones. Las acciones judiciales sobre alimentos han ido en aumento durante los ultimos años, pero hubo un aumento explosivo durante las últimas dos semanas. Durante los ultimos 14 días, han existido 289.992 acciones judiciales en materia de alimentos, superando en 52% a las 185.546 causas por alimento tramiteadas en todo el año 2019.

Este proyecto sin duda va a ir en ayuda de muchas familias que requieren del pago de alimentos, y además, permite visibilizar la situación actual que enfrentamos en nuestro país del impago de alimentos.

Por lo anterior, se sugiere votar a favor de la iniciativa.

Proyecto de reforma constitucional que regula el financiamiento y la propaganda de las campañas para el plebiscito constituyente

Boletín 13689-07

| | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Tramitación | Primer trámite constitucional. |
| Urgencia | Sin urgencia |
| Discusión | En general y particular |
| Sugerencia votación | A favor |
| Origen de la Iniciativa | Moción |
| Autores | Alfonso De Urresti y Álvaro Elizalde |

Sugerencia de votación: Votar a favor

Objetivo del Proyecto

Establecer reglas especiales sobre propaganda electoral con miras a la realización del Plebiscito Nacional de octubre de 2020, relativas a la transparencia del proceso y al régimen de sanciones aplicables por el Servicio Electoral.

Antecedentes

El proyecto ingresó al Senado el 4 de agosto del presente año y fue aprobado en general, con 4 votos a favor y una abstención (Senadora Luz Ebensperger), y en particular por la comisión de Constitución el 19 de agosto.

Contenido

El proyecto de artículo único consta de 8 numerales, que incorpora una nueva disposición transitoria cuadragésimo segunda a la Constitución Política de la República.

El proyecto establece una regulación para la transparencia de la propaganda y publicidad electorales de los plebiscitos que se realizarán en el futuro, en torno a la nueva constitución.

Limite a los aportes para campañas plebiscitarias

- La persona natural no afiliada podrá efectuar un aporte máximo de 300 UF al año.
- La persona natural afiliada sólo podrá efectuar un aporte máximo de 500 UF al año.
- Los partidos políticos no podrán recibir aportes de cualquier naturaleza de personas jurídicas.
- El limite total de aportes individuales que realicen personas naturales a organizaciones de la sociedad civil o a parlamentarios independientes destinados a las campañas, será de 200 UF.
- La sociedad civil cualquiera sea su estructura y denominación, excluyendo a las que persigan fines de lucro, para recibir aportes deberán registrarse ante el Servicio Electoral.

Publicidad de los aportes

- Todos los aportes serán públicos.
- Quien reciba aportes deberá informarlo dentro de los tres días siguientes a su recepción, al Servicio Electoral.

Limite del Gasto Electoral

- El limite del gasto electoral para cada partido será el que resulte de multiplicar 0,005 UF por el número de electores habilitados a la fecha de convocatoria a plebiscito.
- En el caso de parlamentarios independientes y las organizaciones de la sociedad civil, el guarismo será de 0.0003 UF cada uno.

Prohibición de Aportes

- Se prohíbe aportes de campaña provenientes de personas naturales o jurídicas extranjeras, con excepción de los efectuados por extranjeros habilitados legalmente para ejercer el derecho de sufragio en Chile.
- Se prohíbe los aportes de campaña provenientes de cualquier persona jurídica en Chile, salvo los partidos políticos.

Propaganda electoral y el principio de transparencia

- No se va a entender como propaganda electoral la difusión de ideas efectuadas por cualquier medio, incluidos los digitales, o comunicaciones a través de paginas web, etc., realizadas por personas naturales en el ejercicio de la libertad de expresión.
- Las radioemisoras deberán informar al Servicio Electoral de la identidad y montos involucrados de todo aquel que contrate propaganda electoral.

Propaganda electoral por medios digitales

- Los contratos que se celebren para la utilización de plataformas digitales deberán ser publicados por el Servicio Electoral.
- Esta información será publica.

Comentario

Queda poco menos de tres meses para que se lleva. Acabo el Plebiscito Nacional de octubre, y para ello, se ha hecho necesario establecer reglas particulares que rijan las elecciones. Este proyecto viene a establecer reglas claras respecto de la propaganda electoral, la transparencia en materia de propaganda y un limite a los aportes que se pueden efectuar en el marco de este plebiscito. En lo que no esta regulado, regirán las normas generales en la materia.

Se sugiere votar a favor de la iniciativa.

Proyectos de Acuerdo

Tabla 25 de agosto 2020

1. Boletín 2091-12

Proyecto de acuerdo por el que se solicita al señor Ministro de Salud que, si lo tiene a bien, adopte las medidas necesarias para abrir un nuevo centro de trasplante de médula para el tratamiento del cáncer infantil.

Objetivo: Solicitar al Ministro de Salud, abrir un nuevo centro de trasplante de médula para el tratamiento de cáncer infantil

Contextualización:

- i. Gracias al GES, los menores de 15 años reciben tratamiento.
- ii. Los cánceres de sangre son los más comunes, corresponden a un 45% de los cánceres infantiles y de los cuales, aproximadamente un tercio no responde a los tratamientos y requieren un Trasplante de Médula Ósea.
- iii. Actualmente existen en el país 11 centros integrales PINDA (unidad de Oncología Infantil inserta dentro de algunos hospitales públicos). Lamentablemente no todos los niños en el sistema público están teniendo acceso a este tratamiento.
- iv. Además, el único centro en Chile que realiza trasplantes de médula en niños en el sistema público es el Hospital Luis Calvo Mackenna.
- v. El proceso al que debe someterse el paciente es muy largo, ya que son dirigidos a una lista de espera, la que es analizada y discutida por doctores especialistas, pero que sólo sesionan una vez al mes. También se cuestiona el criterio que se usa para seleccionar, ya que sólo se basa en informes, y no en indicaciones del médico tratante.
- vi. A pesar de que exista el donante de médula compatible, ya sea porque es un familiar directo, o esté disponible en algún banco privado, el comité en ocasiones ha preferido seguir buscando y postergando el trasplante.
- vii. Es por todo lo expresado que se asevera que no existe la capacidad del Hospital Luis Calvo Mackenna para poder atender a todos los niños necesitados de este tratamiento, y que se hace necesario abrir un segundo centro de trasplantes para el sector público.

Sugerencia de votación: A favor. No cabe duda de que esta medida va en ayuda de las familias, y es tremendamente positiva para todo el país, ya que considerando la cantidad de niños que sufren de distintos tipos de cáncer y la capacidad que tiene actualmente el Hospital Luis Calvo Mackenna, siendo el único recinto que puede realizar dichos trasplantes, abrir un nuevo centro de trasplante de médula para el tratamiento de cáncer infantil agilizará las listas de espera.

2. Boletín 2103-12

Informe de la Comisión de Ética y Transparencia del Senado recaído en la solicitud del Grupo Bicameral de Transparencia para aprobar el Reglamento de Participación Ciudadana en el Congreso Nacional.

Objetivo: Se pretende integrar la participación ciudadana ya que se estima que genera un importante aporte al debate legislativo, así como también tiene consecuencias positivas en la percepción de la confianza ciudadana en el funcionamiento de las instituciones

Antecedentes relevantes:

- i. Se busca que los ciudadanos entreguen su opinión sobre iniciativas legales, además de contribuir en la convivencia democrática. Se espera lograr a través de un reglamento que fortalece mecanismos de participación y establece procedimientos claros y transparentes, es importante señalar que también se pretende que ambas cámaras suscriban dicho reglamento.
- ii. La iniciativa se enmarca en un acuerdo pactado en la "Declaración de Santiago sobre Transparencia e Integridad en los Parlamentos y Partidos Políticos", el 13 de enero de 2012, al concluir el "Seminario Internacional de Transparencia y Probidad en el Congreso Nacional y en el Sistema de Partidos Políticos".
- iii. El proyecto de ley que pretende regular la participación ciudadana del Senado, rigiendo 3 principios como ejes centrales: representatividad, transparencia y responsabilidad. Además de reconocer 5 formas de participación ciudadana (audiencias públicas, congreso Virtual, consultas públicas, jornadas temáticas, foro ciudadano) y el respectivo procedimiento Los interesados podrán solicitar participar por propia iniciativa, enviando un documento con su opinión, sosteniendo una entrevista presencial o por vídeo conferencia en la cual se consigne el aporte que pueden efectuar.
- iv. De aprobarse este reglamento, entrará en vigencia 120 días después de su aprobación

Sugerencia de votación: A favor: democratizar y hacer parte a la ciudadanía en la discusión de los temas que les importan es clave para el desarrollo y construcción en conjunto del país. Así como también mejora la confianza y la imagen de las instituciones.

3. Boletín 2107-12

Proyecto de acuerdo por el que solicitan a S.E. el Presidente de la República que, por las razones que indica y con los propósitos que señala, se establezca el 18 de marzo de cada año como el Día de la Artritis Idiopática Juvenil.

Objetivo: Solicitar al Presidente que, se establezca el 18 de marzo de cada año como el Día de la Artritis Idiopática Juvenil. A fin de difundir, educar e informar acerca de la existencia de la enfermedad Artritis Idiopática Juvenil (AIJ).

Antecedentes relevantes:

- i. La AIJ (Artritis Idiopática Juvenil) o también conocida como, artritis reumatoide juvenil, es una enfermedad crónica que se presenta antes de los 16 años. Se puede empezar a manifestar sintomatología desde los pocos meses de vida.
- ii. Se caracteriza por la inflamación articular persistente (artritis), dolor y rigidez en las articulaciones. Además de presentar, inflamación articular, dolor, limitación de la movilidad de la articulación y fatiga.
- iii. No existía criterio para nombrar la enfermedad, por lo que un comité de reumatólogos reunidos en Santiago, de Chile en 1995. Denominó a afección como Artritis Idiopática Juvenil, (AIJ) su actual nombre.
- iv. Se pretende además desmitificar que dicha afección relaciona los reumatismos con la avanzada edad. Y concientizar sobre la enfermedad, ya que existen distintos tipos y grados, así como también muchos diagnósticos errados, que entre otras causas se explica por la falta de especialistas.
- v. En 1996, se crea la Corporación Ayuda al Niño con Artritis Crónica Juvenil ANACROJ, que tiene como misión apoyar a las familias de niños con ARJ, gracias a la unión de los padres de pacientes y especialistas, logrando que esta enfermedad fuera incluida en el AUGE.

Sugerencia de votación: A favor: concientizar sobre la enfermedad contribuye a que se diagnostiquen de forma oportuna. Se estima que cerca de 4000 personas que padecen la enfermedad, no están diagnosticados.

4. Boletín 2108-12

Proyecto de acuerdo por el que solicitan a S.E. el Presidente de la República la dictación de normas de calidad ambiental sobre arsénico y otros metales contaminantes derivados de la actividad minera, industrial y de las fundiciones.

Objetivo: Establecer normativa para la calidad ambiental y regulación en la emisión de arsénico y otros metales contaminantes derivados de la actividad minera, industrial y de las fundiciones.

Contextualización:

- i. Desde 1994 nuestro país no tiene una norma de calidad que regule las concentraciones de arsénico en el ambiente. Ese mismo año, tuvo un intento de regularlo, pero sólo duró par de meses. Por lo tanto, nuestro país sólo cuenta con normas que regulan la emisión, pero éstas apuntan principalmente a las fundiciones.
- ii. No contar con una norma que regule la calidad ambiental sobre arsénico y otros contaminantes que derivan de la actividad minera, industrial y fundiciones, es considerado una amenaza grave para la salud de las personas, ya que tienen (según estudios) un alto grado de agentes cancerígenos la exposición constante a arsénico determina un aumento de mortalidad por cáncer, además de infartos al miocardio. Además de aumentar significativamente el riesgo de aborto y malformaciones en la gestación.

- iii. Además, la falta de una norma trae consigo mucho daño colateral, por ejemplo, donde hay presencia de arsénico en el ambiente, este se también se encuentra presente tanto en el aire, como en el suelo y el agua.
 - a. En el suelo: Quintero y Puchuncaví, estas comunas presentan concentraciones de arsénico por sobre los 12 mg/kg, (valor que establece la norma canadiense considerada como norma de referencia) llegando incluso a valores entre 30 y 68mg/kg en las zonas aledañas al complejo industrial de Ventanas.
 - b. En el agua: alta contaminación por arsénico en mariscos de la bahía de Quintero, lo cual afecta directamente a las familias de pescadores que indican que debido a esto ya no pueden exportar sus productos por no cumplir con estándares mínimos de seguridad. También, la contaminación de las fuentes desde donde se extrae agua potable se hará cada vez un problema más agudo ante la escasez hídrica, haciéndose más costosas las medidas de tratamiento necesarias para asegurar los estándares mínimos para el agua potable
- iv. Para otros contaminantes más comunes existen normas de calidad atmosférica, sin embargo, no existen para contaminación en aguas o suelos, donde estos peligrosos metales también afectan la salud de las personas.

Sugerencia de votación: A favor. En el artículo 19 de la CPR se señala: El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza. establece derecho a vivir en un medio libre de contaminación. Por lo tanto, es importante apoyar este proyecto de acuerdo.

5. Boletín 2110-12

Proyecto de acuerdo por el que solicitan a S.E. el Presidente de la República que, si lo tiene a bien, se sirva instruir al señor Ministro de Hacienda que disponga suspender el reavalúo de bienes agrícolas que corresponde realizar este año.

Objetivo: suspender el reavalúo de bienes agrícolas que corresponde realizar este año.

Contextualización:

- i. Producto de la pandemia, pequeños y medianos agricultores de las distintas regiones de nuestro país se han visto profundamente afectados
- ii. Dadas las cuarentenas decretadas en el país, la cadena productiva y a los canales de comercialización, han sufrido consecuencias negativas de las restricciones, así también al sector agropecuario. Ambos sectores deben seguir trabajando día a día para asegurar el abastecimiento de alimentos del país. Sin embargo, deben hacer frente a un complejo escenario económico.
- iii. Desde el 1 de enero del presente año, entró en vigencia La Ley N° 17.325 sobre Impuesto Territorial. Dicha ley contempla el proceso de reavalúo para Bienes Raíces Agrícolas de todo el país, proceso que se realiza cada cuatro años y que coincide con la actualización de los avalúos de los predios agrícolas.

- iv. Aunque ha habido esfuerzos por parte del Ministerio de Hacienda, a través del Decreto 354, publicado el 1° de abril en el Diario Oficial, redujo de 1% a 0,514% el avalúo afecto la tasa con la cual se calcula el impuesto territorial de los predios agrícolas, lo que trata de aminorar el efecto del reavalúo. Se estima que no son suficientes.
- v. Se debe reconocer que el gobierno ha estado dispuesto en entregar distintas facilidades y rebajas tributarias para aminorar el impacto de la pandemia.
- vi. Se solicita esta ayuda para quienes no han cesado en sus funciones, pero si se han visto afectados con menores volúmenes de venta. Así como también han sido el sostén de empleo en gran parte del país.

Sugerencia de votación: A favor. Se ha intentado apoyar de distintas formas a gran parte de las industrias del país, entre algunas iniciativas se destacan la suspensión de los pagos provisionales mensuales (PPM), la postergación del pago del IVA en algunos meses para todas las empresas con ventas menores a UF 350.000 durante 2019, y la liberación transitoria a partir de abril del impuesto de timbres y estampillas a 0% por 6 meses posteriores.

Es muy importante ser considerados con el mundo agricultores ya que han sido sosten del país, permitiendo que durante esta crisis no tengamos desabastecimiento de alimentos.

6. Boletín 2120-12

Proyecto de acuerdo por el que se solicita a S.E. el Presidente de la República que, si lo tiene a bien, se sirva instruir al señor Ministro de Hacienda que estudie la metodología aplicada en el avalúo de predios agrícolas y se suspenda el reavalúo correspondiente al año 2020.

Objetivo: Que el Ministro de Hacienda que estudie la metodología aplicada en el avalúo de predios agrícolas y se suspenda el reavalúo correspondiente al año 2020

Contextualización:

- i. Dado lo dispuesto en el boletín que antecede a éste, en el numeral 5.
- ii. Cada 4 años el SII debe realizar el reavaluo de los bienes agrícolas y no agrícolas, por lo que el día 1 de enero de 2020, se daba inicio al proceso correspondiente.
- iii. En el año en curso, de acuerdo a cifras entregadas por el SII, el incremento de avalúo de este año 2020 fue de un 92,3%, un incremento que no se esperaba ya que la media desde el 2009, rondaba entre el 15 y 30%.
- iv. El avalúo impacta enormemente no solo la carga contributiva ante el Estado y su categorización ante organismos estatales vinculados al fomento y desarrollo de rubro como son Indap, Sercotec y Corfo, sino que muy negativamente ante la banca privada.
- v. El Director del SII señaló que la tasación fiscal agrícola se basa en la capacidad potencial de uso actual de los predios, es decir, sin vinculación alguna con el desempeño económico del contribuyente, ni con otros aspectos ajenos al uso potencial actual del suelo y de la comuna en que el predio está ubicado, lo que parece del todo discutible ya

que las propias instrucciones del Servicio señalan que para determinar la serie de un bien raíz rural debe considerarse la situación y ocupación actual del predio (Circular N° 38, de 1997). Es decir, si para clasificar un predio agrícola debe ajustarse al uso potencial, con mayor razón debe considerarse para efectos de establecer su avalúo.

- vi. Se ha señalado que el Departamento de Avaluaciones del SII ha basado sus estimaciones en datos recogidos a partir de instrumentos como tasaciones bancarias, escrituras y datos de terceros, desconociéndose hasta la fecha qué instrumentos financieros en específico fueron utilizados, ni el método de valuación utilizado, lo que resulta muy relevante ya que no queda duda alguna que el objeto en esta ocasión no fue estimar el avalúo a partir de la capacidad productiva potencial del predio, sino de su valoración comercial.
- vii. Lamentablemente las cuarentenas y demás restricciones han mermado considerablemente las capacidades productivas e ingresos de los agricultores.

Sugerencia de votación: A favor. Como se mencionó anteriormente, el sector agrícola también se ha visto tremendamente afectado por las restricciones sanitarias dispuestas por la autoridad, sin embargo, siguieron abasteciendo a todo el país. Es importante explicar como se determinó dicho avalúo, ya que tiene una estrepitosa alza, lo que perjudicará a los agricultores en el pago de impuestos asociados.

7. Boletín 2121-12

Proyecto de acuerdo por el que se solicita a S.E. el Presidente de la República que, si lo tiene a bien, se sirva adoptar las medidas necesarias y suficientes para suspender los cobros por giros y transacciones asociados a la cuenta RUT del Banco del Estado de Chile, mientras se encuentre vigente el estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública.

Objetivo: suspender los cobros por giros y transacciones asociados a la cuenta RUT del Banco del Estado de Chile mientras dure el estado de excepción constitucional.

Contextualización:

- i. La gran mayoría de los beneficios estatales que se han originado con motivo de enfrentar la pandemia, como el IFE. Han preferido utilizar como medio de pago preferente la cuenta RUT.
- ii. Es por ello que, cobra relevancia que el Banco Estado, entregue facilidades y soluciones que permitan una operación de pago ágil, desburocratizada y sin costos asociados.
- iii. A pesar de que la cuenta RUT no tiene costo asociado por concepto de mantención ni de apertura, los tiene vinculados a las transacciones realizadas. El retiro de dinero de un cajero, las transferencias están gravadas indistintamente del monto.
- iv. Por el contexto de la pandemia, parece apremiante solicitar flexibilizar los cobros asociados a las transacciones.
- v. Se pretende por medio de la suspensión contribuir a no afectar los ingresos de las personas, y salvaguardar los recursos de las personas.

Sugerencia de votación: Abstención/A favor. Es una medida muy popular ya que un porcentaje importante de la población tiene cuenta RUT, la que vino a democratizar el acceso a entidades financieras de toda la población.

Tal y como está dispuesto el proyecto de acuerdo, no será posible concretar dicha petición. El director del Banco Estado, Sebastián Sichel a señalado en distintos medios de comunicación, que es muy difícil eliminar dicho cobro (\$300 para retiro en cajero automático) ya que hay un sistema que opera los cajeros que no es de Banco Estado, y que en realidad el Banco ya hace un esfuerzo subsidiando parte del costo, porque el costo real es de 500 pesos. A pesar de esto, se puede redirigir el esfuerzo y solicitar que no se concrete dicho cobro en cajeros operados por el mismo banco, así como también en distintas cajas vecinas.

8. Boletín 2125-12

Proyecto de Acuerdo por el que se solicita a S.E. el Presidente de la República se abstenga de disponer el reinicio de las clases presenciales en los establecimientos educacionales del país, mientras las comunidades educativas consideren que no están dadas las condiciones sanitarias para ello.

Objetivo: Garantizar el no retorno a clases hasta que las condiciones sanitarias sean óptimas.

Contextualización:

- i. Producto de la crisis sanitaria que atraviesa el país el pasado 15 de marzo se decretó la suspensión de clases en todo el territorio nacional.
- ii. Dado al buen avance que ha tenido nuestro país, se implementa el plan paso a paso, que considera la reapertura de algunos establecimientos educacionales.
- iii. Uno de los argumentos principales que se arguyeron el pasado marzo, es que los niños son vectores de contagio, y es que, según un estudio elaborado por la Universidad de Granada, tan sólo 20 niños entres días pueden llegar a tener contacto con otras 800 personas.
- iv. La experiencia en otros países indica que hay rebrotes del virus que pueden ser muy complicados de manejar.
- v. Es por lo anterior que se considera que no hay un escenario adecuado para volver a las actividades académicas de forma normal.

Sugerencia de votación: En contra. La decisión no puede caer en las comunidades educativas ya que tienen una visión miope de la situación (por ejemplo, no manejan los datos de personales de los contagiados, muchos datos de trazabilidad, medios de transporte, etc.) La autoridad competente debe ser quien determine si las condiciones sanitarias están dadas para el retorno a clases de manera segura.

Minuta Proyectos de ley de Alimentos

Objetivo

Esta minuta tiene por objeto dar a conocer los proyectos más importantes en materia de pensión de alimentos que se encuentran en tramitación, específicamente, aquellos que están relacionados al retiro del 10% de las pensiones.

Proyectos

I. Proyecto de ley de retención judicial y suspensión de la tramitación del retiro de fondos en razón de deudas alimenticias. Boletín 13.682-07.

El Ejecutivo ingresó este proyecto a la Cámara de Diputados el 31 de julio de 2020, siendo aprobado por la Cámara el 5 de agosto, en general y particular, con 149 votos a favor, 0 votos en contra y ninguna abstención. El proyecto actualmente se encuentra en la comisión de Constitución del Senado, donde fue aprobado en general el 10 de agosto. Según el Ministro de Justicia, el proyecto se vería en la Sala esta semana.

El proyecto busca fortalecer las medidas cautelares que permitan garantizar el derecho de alimentos, a través de la retención de los fondos previsionales, cuyo retiro ha sido facultado mediante la reforma constitucional aprobada por la ley de retiro del 10% de las pensiones.

Las medidas cautelares tienen por objeto asegurar el resultado del proceso, por ende, estamos frente a un proceso judicial ante tribunales de familia relacionado al derecho de alimentos, ya sea para solicitar por primera vez alimentos, o para aumentarlo etc. En este caso específico, la medida cautelar solicitada, tendrá por finalidad la retención del 10%¹ los fondos previsionales que puede retirar el alimentante (quien debe alimentos).

Medida Cautelar ¿Cómo funciona?

1. Se solicita al tribunal ejercer la medida cautelar durante un juicio sobre alimentos.
2. El tribunal deberá resolver de plano, en un plazo máximo de 48 horas, si otorga o no la medida cautelar solicitada. En esta etapa la deuda no se encuentra liquidada, es decir, no se encuentra determinado el monto exacto que debe el deudor de la pensión de alimentos.
3. Acogida la solicitud, el tribunal notificará a la AFP por medios electrónicos y en el más breve plazo. Si se desconoce la AFP correspondiente, se notificará a todas ellas. Lo importante es que se notifica primero a la AFP, y no al deudor de alimentos, para que éste no pueda retirar los dineros y vulnerar la medida.

¹ El monto total al cual tiene derecho el alimentante, pudiendo ser el 10% del monto total o más.

4. La AFP deberá notificar al respectivo afiliado o beneficiario de pensión de sobrevivencia por medios electrónicos o carta certificada de la medida cautelar.
5. La medida de retención tendrá valor durante todo el tiempo en que se mantenga la causa que la ha motivado, sin la necesidad de renovación.

Nómina de deudas liquidadas

Los tribunales de familia deberán remitir a las AFPs una nómina indicando las personas que al día de remisión registren deudas derivadas de pensiones alimenticias que han sido invocadas ante los tribunales y que se encuentran liquidadas.

Si la AFP ya realizó la retención previa, con la notificación de la nómina, tendrá que retener los fondos hasta el monto que efectivamente se debe pagar por alimentos. Si no hay retención previa, con la notificación de esta nómina, se procede a retener los fondos que el afiliado solicitó retirar o pueda solicitar retirar.

Consulta a los solicitantes del retiro de fondos.

Las AFPs tendrán la obligación de preguntar al afiliado que soliciten el retiro de fondos, si tiene deudas impagas originadas por obligaciones alimenticias ordenadas por resolución judicial. Si el solicitante responde que tiene deudas alimenticias pendientes de pago, se suspende la tramitación del retiro de fondos, la que podrá retomar su curso una vez que se acredite el pago de los alimentos.

¿Que ocurre cuando el afiliado ya hizo el retiro?

En este caso la AFP que recibe la orden de retención de los fondos ya retirados, deberá informar al Tribunal de dicha circunstancia, señalando el domicilio del solicitante, el detalle del monto retirado, la fecha en que se solicitó el retiro, la fecha de entrega de los fondos y la respuesta que esta persona dio a la AFP ante la consulta de si tenía deudas impagas de alimentos. Si el solicitante responde que no tiene deudas pendientes de alimentos, cuando en realidad si los tiene, esa información deberá ser remitida al Ministerio Público.

Es importante destacar que la medida de retención de los fondos se puede tramitar ante el tribunal **antes de que el afiliado haya efectuado la solicitud de retiro**, de lo contrario, el solicitante podría retirar el dinero antes que la AFP tuviera la orden de retener el monto, vulnerando así su obligación.

II. Proyecto de reforma constitucional que permite el pago de las pensiones de alimentos mediante la subrogación en el retiro de fondos previsionales de la ley 21.248. Boletín 13685-07.

Este proyecto de ley tiene como autores a los Senadores Araya, Chahuán, Huenchumilla, Rincón y Sandoval, y fue ingresado el 3 de agosto del 2020 y se encuentra actualmente en la Comisión de Constitución.

La Ley que permite retirar el 10% de las pensiones establece que, en su inciso segundo, que los fondos se van a considerar (extraordinariamente) intangibles, y que no serán objeto de retención, descuento, compensación legal o contractual, embargo o cualquier forma de afectación judicial o administrativa. Sin embargo, el mismo inciso establece una excepción: cuando se trata de deudas originadas por obligaciones alimentarias.

El problema es que los Senadores de oposición sólo se limitaron a establecer esta excepción, pero sin una bajada práctica de como llevar a cabo el pago de los derechos de alimentos del 10% de las pensiones.

Si bien el proyecto del Ejecutivo en esta materia permite la retención del 10% para realizar el pago de la pensión alimenticia, sólo se lleva a cabo **cuando se realiza la solicitud de retiro de los fondos**. El problema suscita cuando el deudor, a sabiendas que le pueden retener su 10% para pagar alimentos, **decide no realizar el retiro**, así evadiendo el pago de ésta.

Con este proyecto, se permite a todos quienes se les adeuden pensiones alimenticias poder solicitar por sí y a nombre del que debe alimentos, el retiro del respectivo 10% de las pensiones, para el pago de la deuda.

De acuerdo al Ministerio de Desarrollo Social, sólo el 16% de las pensiones de alimentos son pagadas en Chile. Existen más de \$180.000 millones de deudas pendientes en esta materia, dejando a más de 72.000 niños sin apoyo económico.